



REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

22^a REUNIÓN – 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

21 DE DICIEMBRE DE 2016

Presidencia de la señora vicepresidente de la Nación, licenciada **MARTA GABRIELA MICHETTI**

Secretarios:

Señor don **JUAN P. TUNESSI** y señor don **HELIO REBOT**

Prosecretarios:

Señor don **MARIO DANIELE**, señor don **ERIC CALCAGNO Y MAILLMANN**
y señor don **ÁNGEL TORRES**



PRESENTES:

ABAL MEDINA, Juan Manuel
 AGUILAR, Eduardo Alberto
 AGUIRRE DE SORIA, Hilda Clelia
 ALMIRÓN, Ana Claudia
 ALPEROVICH, José Jorge
 BARRIONUEVO, Walter Basilio
 BASUALDO, Roberto Gustavo
 BLAS, Inés Imelda
 BOYADJIAN, Miriam Ruth
 BRAILLARD POCCARD, Néstor
 CABRAL ARRECHEA, Salvador
 CASERIO, Carlos
 CASTILLO, Oscar Aníbal
 CATALÁN MAGNI, Julio César
 COBOS, Julio César Cleto
 CREXELL, Lucila
 DE ANGELI, Alfredo
 DE LA ROSA, María Graciela
 DURANGO, Norma
 ELÍAS DE PEREZ, Silvia Beatriz
 ESPÍNOLA, Carlos
 FELLNER, Liliana Beatriz
 FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
 FIORE VIÑUALES, María Cristina del Valle
 FUENTES, Marcelo Jorge
 GARCÍA, Virginia María
 GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
 GIACOPPO, Silvia del Rosario
 GIMÉNEZ, Sandra Daniela
 GODOY, Ruperto Eduardo
 GONZÁLEZ, Nancy
 GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
 IRRAZÁBAL, Juan Manuel
 ITURREZ DE CAPELLINI, Ada del Valle
 KUNATH, Sigrid Elisabeth
 LABADO, María Esther
 LEGUIZAMÓN, María Laura
 LINARES, Jaime
 LOVERA, Daniel

LUENZO, Alfredo
 MARINO, Juan Carlos
 MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo
 MARTÍNEZ, Ernesto Félix
 MAYANS, José Miguel Ángel
 MENEM, Carlos Saúl
 MERA, Dalmacio
 MIRKIN, Beatriz
 MONTENEGRO, Gerardo Antenor
 NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
 ODARDA, María Magdalena
 OJEDA, José Antonio
 PAIS, Juan M.
 PEREYRA, Guillermo Juan
 PEROTTI, Omar
 PÉRSICO, Daniel Raúl
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
 PICHETTO, Miguel Ángel
 PILATTI VERGARA, María Inés
 PINEDO, Federico
 RIOFRÍO, Marina Raquel
 RODRÍGUEZ MACHADO, Laura
 RODRÍGUEZ SAA, Adolfo
 ROMERO, Juan Carlos
 ROZAS, Ángel
 SACNUN, María de los Ángeles
 SOLANAS, Fernando Ezequiel
 URTUBEY, Rodolfo Julio
 VARELA, Marta Lucía
 VERASAY, Pamela Fernanda
 ZAMORA, Gerardo

AUSENTE, CON AVISO:

LUNA, Mirtha Teresita

LICENCIA POR ENFERMEDAD:

REUTEMANN, Carlos Alberto

SUMARIO

1. **Izamiento de la bandera nacional.** (Pág. 3.)
2. **Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos.** (Pág. 3.)
3. **Plan de labor.** (Pág. 4.)
4. **Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos.** (Pág. 4.)
5. **Moción de tratamiento preferencial formulada por el senador Pinedo.** (Pág. 4.)
6. **Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos. (Continuación.)** (Pág. 4.)
7. **Modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias.** (C.D.-105/16.) (Pág. 5.)
8. **Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Fellner.** (S.-4.916/16.) (Pág. 45.)

9. **Ley complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo.** (O.D. N° 1.328/16.) (Pág. 46.)
10. **Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Pilatti Vergara.** (S.-4.917/16.) (Pág. 46.)
11. **Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Fernández Sagasti.** (S.-4.918/16.) (Pág. 46.)
12. **Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Sacnun.** (S.-4.919/16.) (Pág. 47.)
13. **Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Almirón.** (S.-4.920/16.) (Pág. 47.)
14. **Manifestaciones.** (Pág. 47.)
15. **Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora García.** (S.-4.921/16.) (Pág. 48.)
16. **Manifestaciones.** (Pág. 48.)

17. **Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Giacoppo.** (S.-4.922/16.) (Pág. 49.)

18. **Ley complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo.** (O.D. N° 1.328/16.) (Continuación.) (Pág. 50.)

19. **Apéndice.**

I. **Actas de votación.** (Pág. 65.)

II. **Plan de labor.** (Pág. 72.)

III. **Asuntos entrados.** (Pág. 73.)

IV. **Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 91.)

V. **Inserciones.** (Pág. 131.)

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12 y 37 del miércoles 21 de diciembre de 2016

Sra. Presidente. — La segunda sesión extraordinaria está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidente. — Invito al señor senador Pais a proceder al izamiento de la bandera nacional.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Pais procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

2

ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sra. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha a los efectos de que eventualmente los señores senadores y senadoras se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes¹.

Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdos a efectos de cumplimentar lo

dispuesto por el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado².

Sr. Secretario (Tunessi). — Acuerdos para dar cuenta.

Expediente P.E.-330/16 solicitando acuerdo para designar fiscal de la Procuración General de la Nación a la doctora María Luz Castany.

Expediente P.E.-331/16, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 1 de la Capital Federal a la doctora Silvina Andrea Bracamonte.

Expediente P.E.-332/16, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 8 de la Capital Federal al doctor Marcelo Gota.

Expediente P.E.-333/16, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 7 de la Capital Federal al doctor Javier Pico Terrero.

Expediente P.E.-343/16, solicitando acuerdo para promover a la categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, a los funcionarios de la categoría B, ministro plenipotenciario de primera clase del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a saber: don Armando Juan José Maffei...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Tunessi). — ¿Prescindo de la lectura?

Sra. Presidente. — Sí, por favor. Indique solamente los números.

Sr. Secretario (Tunessi). — P.E.-343/16, en el mensaje 163/16, solicitando acuerdos.

Luego el P.E.-344/16, en el mensaje 164/16, solicitando acuerdo para promover a la categoría B, ministro plenipotenciario de primera clase, a los funcionarios de la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que obran en ese mensaje.

Expediente P.E.-345/16, solicitando acuerdo para promover a la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase, a los funcionarios

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el apéndice.

hechos de esta tarde –tres y media de la tarde–, presidente.

Gracias.

Sra. Presidente. – Pasa a Asuntos Constitucionales.

9

LEY COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO (O.D. N° 1.328/16)

Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día N° 1.328/16. Proyecto de ley referido...

Sra. Pilatti Vergara. – Pido la palabra. Es por el tema de Fellner.

Sra. Presidente. – Espéreme un segundo, porque está leyendo el Secretario. Así hacemos correctamente.

Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día N° 1.328/16. Proyecto de ley referido a la ley complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo. Consta de un anexo: dictamen de minoría de la señora senadora Negre de Alonso. Expediente P.E.-201/16.

Sra. Presidente. – Vamos a tratar ese proyecto.

Sr. Pichetto. – El senador Pais va a ser el miembro informante.

Sra. Presidente. – Perfecto.

10

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA POR LA SEÑORA SENADORA PILATTI VERGARA (S.-4.917/16)

Sra. Pilatti Vergara. – Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Pilatti Vergara.

Sra. Pilatti Vergara. – Es para sumarme al pedido de cuestión de privilegio que hizo la senadora Fellner.

Sra. Presidente. – Perfecto, se toma.

Sra. Pilatti Vergara. – Quiero argumentar brevemente.

Sra. Presidente. – No me parece que sea el momento.

Sra. Pilatti Vergara. – Señora presidente: ha sido golpeada fuertemente una diputada

nacional, la diputada nacional Mayra Mendoza, en ocasión de hacer una visita a la compañera Milagro Sala, en una provincia gobernada por un ciudadano que fue colega nuestro en este Senado y que mientras tuvo ocasión, una y otra vez, de hacer uso de la palabra, no terminaba de hablar y de vanagloriarse del respeto a las instituciones, a la República y al Estado de derecho. Y hoy vemos cómo, día tras día, somos vergüenza nacional y vergüenza internacional por los avances y el exceso en el ejercicio de poder de este gobernador.

Por favor, hoy le costó la salud en el cuerpo y, tal vez, psicológicamente a una compañera, diputada de la Nación, como Mayra Mendoza. Por eso, pido enfáticamente, enérgicamente, una cuestión de privilegio contra Gerardo Morales.

Sra. Presidente. – Perfecto, será pasada a Asuntos Constitucionales.

Tiene la palabra el senador Pais.

Sr. Sacnun. – Quiero adherir a la cuestión de privilegio.

Sra. Presidente. – Es que no se adhiere a las cuestiones de privilegio.

Sr. Sacnun. – ¡Entonces quiero plantear una cuestión de privilegio!

–Varios señores senadores hablan a la vez.

11

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA POR LA SEÑORA SENADORA FERNÁNDEZ SAGASTI (S.-4.918/16)

Sra. Presidente. – Tengo a la senadora Fernández Sagasti.

Sra. Fernández Sagasti. – En el mismo sentido, señora presidente.

Si no se puede adherir, vamos a hacer las cuestiones de privilegio que hagan falta. Es una legisladora nacional. Acá están las fotos. Todos los medios nacionales están pasando la represión en Jujuy. No podemos vivir adentro de un coco. Hay represión en Jujuy, hay más de diez detenidos y hay presos políticos. ¿Hasta cuándo la violencia contra el pueblo argentino, señora presidente?

Enfáticamente, planteamos una cuestión de privilegio y solidaridad con todos los diputados y diputadas nacionales que fueron reprimidos en Jujuy por el gobernador Gerardo Morales.

18

**LEY COMPLEMENTARIA DE LA LEY
DE RIESGOS DEL TRABAJO (O.D. N° 1.328/16)
(continuación)**

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.

Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, señora presidenta.

Voy a someter a consideración de este cuerpo los motivos por los cuales el Ejecutivo nacional envía el proyecto de ART, elaborado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Este proyecto viene trabajado durante bastante tiempo en coordinación con las empresas, los gremios...

–Varios señores senadores hablan a la vez

Sra. Presidente. – Silencio, por favor.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Está hablando la senadora Rodríguez Machado.

–Varios señores senadores hablan a la vez

–La señora senadora González realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente. – Está hablando la senadora.

–La señora senadora González realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. González. – Si quiere, la acompañamos a hacer la denuncia.

Sra. Rodríguez Machado. – ...Y la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, que se enmarca en reducir la litigiosidad del sistema de riesgos de trabajo en la Argentina.

–La señora senadora Fellner realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Rodríguez Machado. – Debo informar también que el presidente de la comisión, el senador Daniel Lovera, ha hecho concurrir a la comisión a todos los actores involucrados. Por lo tanto, hemos escuchado no solamente al Ejecutivo, sino también a las organizaciones obreras que plantearon lo suyo.

También debo decir que, a posteriori, los senadores de la comisión incorporaron modificaciones al texto enviado por el Ejecutivo y ellas han sido aceptadas, motivo por el cual seguramente pedirán la palabra para explicar

estas modificaciones que se han incorporado en el texto.

El hilo conductor de las ideas rectoras del proyecto que someto a consideración de mis pares tiene que ver con el concepto de previsibilidad, de costos laborales razonables y de reducir la incertidumbre en la creación de nuevos puestos de trabajo, pero también trae para el sector laboral y para los trabajadores algunos beneficios que significan una mejora en las prestaciones.

Para recurrir a una síntesis, este proyecto de reforma del sistema de riesgos del trabajo tiene cuatro ejes centrales que permitiré luego desarrollar. El primero de ellos, una instancia administrativa, bajo el título de “Comisiones médicas”; el segundo, un autoseguro público provincial; el tercero, una mejora de las prestaciones y, finalmente, la idea de generar una ley de prevención de riesgos del trabajo.

Con relación a lo que es la instancia administrativa –o lo que vamos a llamar “comisión médica”–, como abogada una suele aconsejar a los trabajadores cuando hacen la consulta que siempre es bueno arreglar porque a veces el trámite judicial genera no solamente la dificultad del tiempo al que se somete el trabajador y un perjuicio, ya que él debe recurrir a financiarse con préstamos o de otra manera hasta que finalmente logra ganar el juicio, sino que además a veces los juicios se pierden sin que sea realmente justicia. Esto, porque en ocasiones se pierden por cuestiones del mismo proceso de tramitación. Entonces, la idea de este proyecto es la incorporación de una comisión médica que tenga características legales de homologación. La comisión médica tiene que establecer, en autoridad de cosa juzgada, lo que a ella se someta. Esto, para el caso de que no haya recibido recurso alguno por las partes. Está la situación de cuando los trabajadores no están en blanco o no están sujetos a ART. Esta instancia es obligatoria, se homologa con capacidad de cosa juzgada, pero no implica, si no se llega a un acuerdo, la imposibilidad de arribar a sede judicial.

Bajo estos conceptos y luego de haber concurrido el Ejecutivo nacional a más de treinta y cinco encuentros con los distintos sectores gremiales con el ánimo de avanzar hacia beneficios que también cubran a los trabajadores,

debo informar sobre cuáles son las mejoras de estas prestaciones que tienen que ver con el mundo del trabajo.

Además de convertirlas en integrales, en que el pago se realizará en la cuenta sueldo, en que se prolonga también el plazo de la incapacidad laboral temporaria hasta dos años para que en ese entretiem po o en ese plazo el trabajador pueda recuperarse y luego asistir al trabajo, también genera una equiparación entre los trabajadores provinciales, nacionales o municipales, creando lo que se refiere a un autoseguro público provincial. Este autoseguro establecerá la posibilidad de que también los trabajadores del sector público puedan tener un sistema de prevención de riesgo del trabajo que beneficie la posibilidad de verse favorecidos con cobertura de este tipo que sí existe en el sector público.

A estas situaciones –la instancia administrativa, el autoseguro público provincial y las mejoras de las prestaciones– se le suma la decisión de establecer una ley de prevención. Es así que bajo el consejo y la decisión de la CGT se establece que en el plazo de tres meses se debería estar redactando un proyecto, que se acompañará al Ejecutivo para que después este haga lo propio y lo presente ante las Cámaras, de prevención en riesgos del trabajo.

Quiere decir que estos cuatro ejes fundamentales dan pie también a una serie de reformas que tienen que ver, sobre todas las cosas, con mejorar la previsibilidad no solamente en la litigiosidad, sino también en el proceso que debe cumplir judicialmente el trabajador; también, en qué momento puede lograr el pago de esas prestaciones.

Como en la comisión se aprobó un despacho, pero luego hubo modificaciones, se me va a permitir leer rápidamente cuatro, cinco artículos que son modificados y que tienen que ser leídos en voz alta para que el Secretario Parlamentario tome nota o razón de ellos y que sean incorporadas en el proyecto que salga al Ejecutivo.

En el artículo 1º, segundo párrafo, el texto...

Sr. Secretario (Tunessi). – Tengo el texto.

Sra. Rodríguez Machado. – ¿Usted lo tiene?

Hay un segundo párrafo, con un texto aprobado –por favor, controle–, que tiene inherencia en el domicilio jurisdiccional correspondiente.

Será del domicilio del trabajador al del lugar de la efectiva prestación de servicios del trabajador o, en su defecto, al del domicilio donde habitualmente aquel se reporta, a opción siempre del trabajador.

En el mismo artículo se establecerá un cuarto párrafo que reza de esta manera: “Los honorarios profesionales que correspondan por patrocinio letrado y demás gastos en que incurra el trabajador a consecuencia de su participación ante las comisiones médicas, estarán a cargo de la respectiva aseguradora de riesgo del trabajo, ART”.

Ahora, ya en el tercer párrafo del artículo 2º, se establece que los recursos interpuestos procederán en relación y con efecto suspensivo, a excepción de los siguientes casos, en los que se procederá con efecto evolutivo: a) Cuando medie apelación de la aseguradora de riesgo del trabajo ante la Comisión Médica Central, en el caso previsto en el artículo 6º, apartado segundo, punto c), de la ley 24.557, sustituido por el artículo 2º del decreto 1278/2000; o b) Cuando medie apelación de la aseguradora de riesgo del trabajo ante la Comisión Médica Central, en caso de reagravamiento del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional.

A la vez, hay que agregar en dicho artículo, en el último párrafo, lo siguiente: “En caso de que no existieran profesionales que integren los cuerpos médicos forenses en cantidad suficiente para intervenir con la celeridad que el trámite judicial lo requiera como peritos médicos, los tribunales podrán habilitar mecanismos de inscripción de profesionales médicos que expresamente acepten los parámetros de regulación de sus honorarios profesionales, conforme a lo previsto en el párrafo precedente”.

El artículo 3º, cuarto párrafo, debe quedar de esta manera: “Dicho plazo será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o la enfermedad profesional debidamente fundada”.

En el artículo 12, inciso 1, que tiene que ver con el ingreso base y la base del cálculo, debe decir: “A los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados –de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Convenio 95 de la OIT– por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicios si este

fuera menor, los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio de actualización mes a mes, aplicándose la variación del índice RIPTE, remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores...”.

Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una interrupción?

Sra. Presidente. – Perdón: le pide una interrupción la senadora Negre.

Sra. Rodríguez Machado. – Sí, senadora, porque es una de las que colaboraron en la redacción del proyecto.

Sra. Negre de Alonso. – A lo mejor se equivocó usted al leerlo, pero como está quedando constancia en la versión taquigráfica, quiero aclarar algo de la parte de actualización que es muy importante.

El párrafo es el siguiente: “Por el trabajador, durante el año anterior a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de prestación del servicio, si fuera menor, los salarios mensuales...”.

¿Estamos?

Sra. Rodríguez Machado. – Sí, senadora.

Yo lo que solicito, si les parece, son dos modificaciones más en los artículos. Si está el texto en Secretaría, voy a solicitar que sean estos los ingresados. Ello, si el presidente de la comisión está de acuerdo y el senador Pais también.

Y en el artículo 17 bis tienen que incorporar la palabra “solo”, cuando hable de las compensaciones adicionales.

Considero que hemos alcanzado la versión...

Sra. Negre de Alonso. – ¡Es el 11, senadora!

Sra. Presidente. – Le pide una interrupción el senador Lovera.

Sra. Rodríguez Machado. – Sí.

Sra. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Lovera.

Sr. Lovera. – Señora presidenta: nos hemos manejado con el texto acordado en general. Por eso, más allá de que la senadora en uso de la palabra u otros senadores y senadoras pidan la palabra y se manifiesten al respecto, lo ideal sería que el texto que hemos acordado y acercado a Presidencia después sea leído por Presidencia para que podamos tomar nota y corregirlo si hiciese falta.

Sra. Rodríguez Machado. – No hace falta leer todo el proyecto, solamente la parte modificada, si estamos de acuerdo.

Igualmente he leído hasta el artículo 11. De manera tal que podría leer los que siguen. La última parte del artículo 11 es la que estaría faltando.

Entonces, si se acepta de esta forma...

Sra. Presidente. – Senador Pais.

¿Usted terminó, senadora Rodríguez Machado?

Sra. Rodríguez Machado. – Sí, señora presidenta.

Sr. Pais. – Presidenta.

Sra. Presidente. – Senador Pais: dígame.

Sr. Pais. – Gracias, presidenta.

En función de lo dispuesto por mi bloque parlamentario y fundamentalmente por el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, voy a actuar como miembro informante.

Vamos a aceptar las modificaciones que hemos trabajado realmente de consuno con el oficialismo y con la senadora Liliana Negre de Alonso, que también presentó un dictamen. Hemos consensuado modificaciones que, a nuestro criterio, son importantes y enriquecen esta norma.

Yo consideré que, como era un proyecto del Poder Ejecutivo, está bien que fundamente las necesidades y las razones de su remisión la senadora preopinante, sin perjuicio de lo cual vamos a hacer algunas consideraciones sobre este proyecto, sobre sus fundamentos, sobre sus alcances y sobre las modificaciones que hemos introducido. Por eso hoy lo estamos tratando.

Realmente, desde el primer semestre del año hemos leído algunas publicaciones que ya avisaban a este Congreso que desde el Poder Ejecutivo se estaba trabajando en una modificación a la Ley de Riesgos de Trabajo. De hecho, se entraba a hablar de la litigiosidad del sistema prendiendo luces de alerta, fundamentalmente, desde la óptica de la Unión Argentina de Aseguradoras del Riesgo de Trabajo –UART–.

Cuando el Poder Ejecutivo nos remite el proyecto, verificamos que realmente pusiera como la última razón de esta norma –y hasta del propio sistema o subsistema de seguridad social del riesgo de trabajo– asegurar que cada

puesto de trabajo sea sano y seguro para quien lo ejecute. Así, lo incorpora en los términos del convenio 102 de la OIT, que es una norma de jerarquía superior que, además, nos impone que las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo forman parte de la respuesta que en materia de seguridad social debe dar el Estado.

Ahora bien, tenemos un sistema que en términos de prestaciones está privatizado. Los prestadores del sistema son las aseguradoras de riesgos del trabajo. Tenemos el rol del Estado, a través de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que debe articular, primero, el poder de policía para que en forma eficiente se brinden las prestaciones en especie, las prestaciones dinerarias y las indemnizaciones y para que este sistema pueda funcionar en términos eficientes de forma tal que permita el resarcimiento del trabajador damnificado por un accidente o por una enfermedad profesional en términos tales que sea una indemnización justa, efectiva y temporalmente eficaz. Esto perseguimos y en eso seguimos trabajando.

Cuando se nos remite el proyecto del Poder Ejecutivo, nosotros fuimos críticos, presidenta, con el propio ministro y le expresamos que realmente este proyecto buscaba modificar... No crea las comisiones médicas porque ya existen. La senadora preopinante hablaba de que se crean comisiones médicas. Ya existen las comisiones jurisdiccionales, pero buscaba modificar el sistema y el procedimiento –según se nos decía– para brindar mayor agilidad, mayor seguridad y, fundamentalmente, la posibilidad de que el trabajador pueda acceder a indemnizaciones en tiempo y forma, pero, además, para disminuir la litigiosidad.

Nosotros expresábamos que no hay que tener miedo a la litigiosidad y que, para abordar las causas de la litigiosidad, debemos analizar cuáles son esas causas, que no es estrictamente el sistema en sí o el procedimiento. Cuando queremos hacer un procedimiento que cierre la posibilidad del litigio, lo que estamos haciendo es atacar las consecuencias y no las causas. Las causas de la litigiosidad son algunas respecto de las cuales la actual ley da respuesta y otras a las que no se da respuesta. Esperemos que esas respuestas vengan del compromiso asumido por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, de la comisión creada por la 24.557 y hasta de otras

iniciativas parlamentarias. Esperemos que den la respuesta que hoy no tienen muchos trabajadores argentinos, que deben recurrir a los tribunales para lograr la tutela judicial efectiva. Se trata de un derecho constitucional, un derecho humano garantizado por los tratados de derechos humanos e incorporado en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución como una norma fundamental porque es el derecho que le permite hacer operativos otros derechos. ¡Fíjense qué importante! Entonces, no hay que tener miedo a la litigiosidad, en tanto y en cuanto es la consecuencia del ejercicio de un derecho de un ciudadano para ejercer lo que se denomina la tutela judicial efectiva.

Pero seamos claros: cuando hablamos de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, nosotros tenemos que considerar que está en la génesis del sistema que, cuando un trabajador va a denunciar un accidente o una enfermedad profesional, el empleador la recibe y la traslada a la ART. Esta última sabe que a partir de ese momento, en vez de un haber, tiene un debe: tiene un perjuicio porque deberá pagar prestaciones dinerarias, deberá pagar prestaciones médicas y, eventualmente, deberá pagar indemnizaciones. Entonces, está en la génesis del tema la litigiosidad inherente a las consecuencias dañosas de un accidente de trabajo. Debemos trabajar todos por la prevención y, cuando ocurre un accidente, es importante un rol tutelar activo del Estado para que quien es sujeto de preferente tutela y protección –porque así lo dispone la Constitución–, como es el trabajador, sea protegido en tiempo y forma.

La mayoría de los juicios tienen diferentes causales. Acá las estuvimos analizando. Fíjese que, en la media mundial, las enfermedades profesionales son aproximadamente el 30 por ciento de un universo del 100 por ciento de enfermedades y accidentes de trabajo. En la Argentina no llegan al 3 por ciento. ¡Algo está mal! En la Argentina se le niega al trabajador el reconocimiento de enfermedades profesionales. Es parte del problema y es parte de la litigiosidad.

También hay muchos juicios que se originan por accidentes de trabajo no aceptados por las ART –y, muchas veces, no convalidados por las comisiones médicas jurisdiccionales–, reagravaciones de incapacidades laborales no cubiertas

por la ART, no aceptadas por ellas y tampoco habilitadas por las comisiones médicas. Esto genera que el trabajador deba inexorablemente ir a juicio. Hay enfermedades profesionales rechazadas por las ART y por las comisiones médicas porque no se las encuentra en los listados. Ello, pese a que la misma ley 24.557 determina que, aunque no se encuentre en los listados, si la enfermedad es consecuencia directa de la ejecución de tareas debe reputarse como enfermedad profesional. Pero, igual, nos cuesta avanzar. Muchas veces esto es consecuencia del propio sistema, porque hoy tenemos comisiones médicas integradas exclusivamente por médicos que muchas veces no pueden discernir cuándo un accidente es *in itinere* y no pueden discernir cuándo la ejecución de un trabajo determina la enfermedad profesional.

Entonces, estamos progresando en algunos aspectos, porque hemos incorporado profesionales abogados a las comisiones médicas jurisdiccionales para que puedan, coadyuvando con los médicos, dictaminar mejor estos casos. Pero seamos claros: existe también mucha litigiosidad por falta de pago en tiempo y forma de las indemnizaciones o incumplimientos defectuosos de las prestaciones médicas por parte de las ART.

El sistema es muy complejo, por eso se generan los juicios. Nosotros no debemos preocuparnos por la existencia de los juicios, sino atender las causales de esos juicios. Y en tanto y en cuanto esta norma, en principio, da alguna respuesta, nosotros tenemos que decir que vamos a facilitar su avance.

Pero también digamos la verdad: al proyecto original le hemos incorporado muchas reformas que nos han convencido de que esta norma ha sido mejorada sustancialmente, teniendo como norte el único beneficiario de este subsistema de seguridad social: el trabajador enfermo por enfermedad profesional o accidentado. Ese es el único beneficiario, ese es el sujeto de tutela preferencial.

Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos modificado el artículo 1º. No lo voy a leer porque ya lo leyó la senadora, lo voy a explicar. Justamente, es una iniciativa que hemos conversado con la senadora Negre de Alonso...

Sra. Presidente. – Senador: le voy a pedir que redondee. Alrededor de un minuto tiene, más o menos.

Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta: no se puede, porque estamos...

Sra. Presidente. – Espere, senadora, que está en uso de la palabra el senador Pais.

Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una interrupción el senador?

Sra. Presidente. – ¿Le da una interrupción?

Sr. Pais. – Sí, por favor.

Sra. Negre de Alonso. – Yo me quiero dirigir a usted, presidenta.

Recién a la senadora que es miembro informante la cortaron y no terminó de decir las reformas.

Sra. Presidente. – No, me dijo que sí, que había terminado. Le pregunté...

Sra. Negre de Alonso. – Lo que quiero decir es que actuemos con la racionalidad que corresponde...

Sra. Presidente. – Yo le voy a decir algo, senadora...

Sra. Negre de Alonso. – Déjeme terminar de hablar.

Sra. Presidente. – Yo no decido esto. En Labor Parlamentaria, su presidente de bloque...

Sra. Negre de Alonso. – No, déjeme terminar de hablar.

Sra. Presidente. – Déjeme que le explique por qué estoy haciendo esto.

Sra. Negre de Alonso. – Pero estoy en uso de la palabra yo, presidenta.

Sra. Presidente. – Su presidente de bloque, en Labor Parlamentaria, decidió junto con los otros presidentes de bloque asignar una cantidad de minutos para cada uno. Si yo no lo hago respetar, el problema es que después los presidentes de bloque se ponen en contra de lo que yo hago.

Entonces, Labor Parlamentaria es la clave. Tienen que ponerse de acuerdo ustedes con sus presidentes de bloque.

Sra. Negre de Alonso. – Presidenta: yo me estaba dirigiendo a usted en el uso de la palabra.

Yo le voy a decir una cosa: yo eso lo sé, pero este es un tema en el que se han unificado las posturas de Cambiemos, del Frente para la

Victoria y de la suscripta, que también tenía un dictamen en minoría, y había un representante de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

Hay que darles una interpretación a los artículos porque es un tema delicado. Y el senador Lovera, que es el presidente de la Comisión de Trabajo, ha dicho claramente que no se puede decir simplemente “modificamos” sin claramente identificar las modificaciones.

Entonces, les pediría dos o tres minutos para que el senador Pais explique las modificaciones.

Sra. Presidente. – ¡Es lo que le dije: que tiene dos o tres minutos más! ¡Exactamente eso es lo que le dije!

Sra. Negre de Alonso. – No, porque como recién quedó colgada la última parte del artículo...

Sra. Presidente. – Le pregunté a la senadora si había terminado y me dijo que sí.

Sra. Negre de Alonso. – No...

Sra. Rodríguez Machado. – Solicito que después se lea...

Sra. Negre de Alonso. – Claro; porque si no después...

Sra. Presidente. – Está perfecto, pero yo les pido por favor que entiendan mi rol: mi rol es respetar Labor Parlamentaria.

Sra. Negre de Alonso. – Yo lo entiendo, presidenta, pero hay una modificación...

Sra. Presidente. – Senador Pais.

Sr. Pais. – Ahora tengo tres minutos más que me corresponden.

Sra. Presidente. – Perfecto.

Sr. Pais. – Yo voy a explicar artículo por artículo en qué consisten las modificaciones porque eso es fundamental, porque eso forma parte de lo que se ha enriquecido este proyecto de ley y de lo que ha sido trabajado. Acá vinieron la CGT, asociaciones profesionales de abogados, asociaciones de profesionales de abogados laboristas, el Colegio Público de Abogados, la propia Superintendencia. Por supuesto, entre todos queremos hacer una ley superadora, que mejore y que atienda eventualmente varias de las causales que han determinado la necesidad de proyectar una reforma.

En el artículo 1º la modificación sustancial que le hemos introducido al texto del proyecto original radica en que sea el trabajador quien, a su opción, determine cuál es la comisión

médica jurisdiccional que pueda actuar: la de su domicilio. Esto es fundamental, porque hay trabajadores que viven en provincias diferentes de donde se accidentaron o donde fueron contratados y el domicilio del trabajador generalmente es el lugar donde se asiste cuando incurre en un accidente o enfermedad profesional y debe inasistir a su trabajo. No permanece en el lugar del trabajo, permanece en su domicilio.

En el lugar de prestación de servicios o, en su defecto, en el domicilio donde habitualmente aquel se reporta, a opción del trabajador, y su resolución agotará la instancia administrativa, se indica. Resulta importante porque, a consecuencia de esto, después viene, en el grado de apelación, cuáles serán los tribunales ordinarios –del trabajo, de la justicia nacional o de la provincial– que serán competentes para intervenir ante las apelaciones de las resoluciones de las comisiones médicas jurisdiccionales y de la Comisión Médica Central.

Después, en el artículo 1º también hemos incorporado un concepto que no estaba en la ley. Precisamente, en la ley se preveía el asesoramiento profesional y el necesario patrocinio letrado, pero no quién solventaba los gastos de ese patrocinio letrado, y los gastos que demandan de la actuación del trabajador en el marco de las comisiones médicas deben ser soportados, también como una consecuencia accesorial del aseguramiento que tienen, por las aseguradoras de riesgos de trabajo. Entonces, fijamos acá que los honorarios profesionales y los demás gastos –que pueden ser gastos de traslado y otros elementos– también serán a cargo de las aseguradoras de riesgos del trabajo en función de garantizar la debida participación del trabajador.

En el artículo 2º de la norma se estaba previendo que actuasen los profesionales médicos del cuerpo médico forense, tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales. Incluso, se nos dijo acá que ello era para abaratar los costos económicos de los procesos judiciales en función de la regulación de honorarios de los peritos. Nosotros entendemos que esto es correcto en tanto y en cuanto los cuerpos médicos forenses tengan la cantidad suficiente y necesaria de profesionales para que, en tiempo y forma, puedan dar respuesta adecuada a esos requerimientos de los trabajadores en la Justicia. Entonces, hemos previsto también en la norma

que, en el caso de que no exista la cantidad suficiente para actuar con la celeridad que corresponda en los cuerpos médicos forenses de las provincias o de la Nación, los tribunales competentes habilitarán la inscripción de profesionales médicos que quieran trabajar como peritos y que acepten la forma de regulación prevista en la ley, que no es más en relación porcentual a la cuantía del juicio, sino en función de la retribución conforme el trabajo efectivo realizado por el profesional.

También hemos establecido una limitación diferente a las previstas por el texto original. En cuanto a improrrogabilidad del plazo de la actuación de las comisiones médicas, son sesenta días y solamente prorrogable por cuestiones de hecho, pero no cualquier cuestión de hecho: hemos especificado la norma para que no se desnaturalice un proceso que debe ser rápido. Las cuestiones de hecho serán las relacionadas con la acreditación del accidente o de la enfermedad profesional debidamente fundadas.

Hay una iniciativa muy importante de la senadora Negre de Alonso: hemos colocado la operatividad inmediata de la aptitud de la acción judicial efectiva, diciendo que todos los plazos resultarán perentorios y su vencimiento dejará expedita la vía prevista en el artículo 2º de la presente ley, que es la vía judicial efectiva. Es decir, el Estado debe actuar con celeridad, debe pronunciarse en tiempo y forma para que sea una garantía efectiva también de lo que se denomina la tutela jurisdiccional efectiva administrativa, porque lo que están haciendo estos órganos son actuaciones judiciales administrativas.

Además, se nos había puesto en el proyecto del Poder Ejecutivo que todos los recursos serían en relación y con efectos suspensivos. Nosotros hemos dicho que no. Cuando haya prestaciones médicas a favor de los trabajadores, los recursos tienen que ser con efectos devolutivos. Las prestaciones médicas deben continuar. Entonces, hemos puesto los supuestos: cuando medie apelación de la aseguradora de riesgos del trabajo, en los casos en que se determine la existencia de una enfermedad profesional, más allá de que apele la aseguradora de riesgos de trabajo, debe continuar brindando las prestaciones dinerarias y debe continuar brindando las prestaciones médicas. Porque,

de lo contrario, se sometería automáticamente a un trabajador que es sujeto de un recurso a la imposibilidad de seguir recibiendo prestaciones dinerarias y médicas.

Segundo tema, la otra apelación, cuando medie apelación de la aseguradora de riesgos del trabajo ante la comisión médica, en caso del reglamento de accidentes. Es decir, si hay un reglamento de accidentes, el trabajador inicia el reconocimiento ante la comisión médica jurisdiccional y, si esta lo acepta, automáticamente deviene en que la aseguradora de riesgos del trabajo debe darle prestaciones dinerarias y médicas. Ahora bien, si apela y no establecemos esta excepción dejaría de darlas hasta que resuelva la Comisión Médica Central. Recordemos que el sujeto preferente de tutela de esta ley es siempre el trabajador, no la aseguradora. Entonces, lo estamos estableciendo acá.

Luego, también modificamos una norma que es fundamental: el artículo 11. Y esto quiero aclararlo porque es, tal vez, la norma central que hemos modificado. Yo creo que el proyecto avanzaba, hablaba de los cuatro meses de las últimas remuneraciones para determinar el salario base y, fundamentalmente, hablaba en el caso de que fuera el último mes. Pero, sin perjuicio de ello, nosotros creemos que esta norma es más justa porque, partiendo de una mejor determinación del ingreso base, va a surgir un monto más justo con relación a la indemnización y, si el monto es más justo con relación a la indemnización, esa indemnización va a ser más eficiente y va a evitar, inclusive, que el trabajador se sienta que no es indemnizado adecuadamente y utilice la vía judicial.

Así, hemos modificado el artículo 12 y hemos puesto en el inciso 1 lo siguiente: “A los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados por el trabajador durante el año anterior”.

Esos salarios, incluso, mes a mes van a ser actualizados por el RIPTE, por lo cual vamos a tener un salario ponderado que en el año va a tener también los incrementos naturales que han sido dados por las asociaciones gremiales de trabajadores a través de la negociación paritaria. Creemos que es una forma de determinación más justa a lo largo de un promedio, que es la consecuencia de la

percepción salarial anual, para que el ingreso base sea una representación actualizada del verdadero poder adquisitivo del trabajador: es decir, de la verdadera contraprestación que recibe mes a mes por su trabajo personal.

Y otras normas que modificamos son los incisos 2 y 3 de ese artículo 12. Se había establecido que desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación, el monto del ingreso base –desde la fecha que se determine el ingreso base hasta la fecha de liquidación puede pasar hasta más de un año– devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa de la cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina a treinta días. Tanto la senadora Negre de Alonso como quien les habla habíamos advertido que el inciso 3 volvía a establecer la misma tasa. Parecía casi una invitación para que, incurrida en mora la aseguradora de riesgos del trabajo, no pagara porque tenía la misma tasa de interés. Por supuesto que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo la puede sancionar con una multa, pero al trabajador le causa un perjuicio grave porque no es pagado en tiempo y forma y el sistema debe bregar para que se pague en tiempo y forma.

En tal sentido, la senadora Negre de Alonso había previsto una tasa diferenciada con un 50 por ciento. Hemos encontrado otra solución: aplicar el artículo 770 del Código Civil y Comercial, que es la capitalización de intereses. Esto, que tiene un nombre medio raro para los que no son abogados, que se llama “anatocismo”, es importante porque va a permitir que la tasa activa del Banco de la Nación Argentina que actualiza con intereses la determinación del monto base, del ingreso base –que es el que determina la indemnización–, se capitalice al día de mora y, a partir de la mora, la nueva tasa activa se va a aplicar sobre el capital y los intereses. Esto resulta justo porque es también una sanción pecuniaria para quien especula en términos económicos.

Luego, en el artículo 14 se reitera la misma metodología en materia de los recursos, es decir, son todos en relación y con efecto suspensivo, a excepción de los casos ya mencionados, donde van a ser con efecto devolutivo.

En el artículo 19, a instancias de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, también corre-

gimos que lo que elaborará la Superintendencia de Riesgos del Trabajo será un anteproyecto –que esperamos que se cumpla– para que en el plazo de tres meses sea analizado por el Comité Consultivo Permanente de la ley 24.557. Esto va a posibilitar que se dé una respuesta legislativa adecuada en la materia más importante y la materia que va a atender las verdaderas causas de la litigiosidad, que son las materias de prevención.

Tenemos muchos más elementos para mencionar, pero en función de los acuerdos parlamentarios y mínimamente explicando que hemos introducido modificaciones al texto del dictamen en los artículos 1º, 2º, 3º, 11, 14, 16, 18 y 19, que sucintamente hemos explicado, pedimos que luego de que sean leídas mínimamente las modificaciones se vote en general y en particular.

Nada más, señora presidenta.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidenta.

Sra. Rodríguez Machado. – ¿Me permite una interrupción?

Sra. Presidente. – Le piden una interrupción.

Sra. Negre de Alonso. – Sí.

Sra. Rodríguez Machado. – Simplemente para agregar al listado del senador Pais el artículo 17 bis, en el cual se agrega la palabra “solo”, que no estaba incorporada.

Son correctos todos los artículos que mencionó, más el 17 bis con la palabra “solo”, que genera una modificación.

Sra. Presidente. – Perfecto.

Continúa en el uso de la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – No voy a usar todo mi tiempo en virtud de que el senador Pais lo ha explicado artículo por artículo. Solamente quería resaltar dos cuestiones.

En primer lugar, que era importante que lo explicara porque, en realidad, estamos haciendo una modificación en el orden del pleno. Esto no lo ha hecho la comisión, sino que lo estamos haciendo acá directamente. Éramos tres o cuatro los que nos habíamos reunido y me parecía que había que explicárselo al resto del pleno.

Creo que lo que también hay que dejar claro es que esta es una ley complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo. No una modificación, es una ley complementaria, o sea que amplía. Ansiamos que los principios generales de la Ley de Riesgos del Trabajo, que son prevenir, reducir la siniestralidad y lograr la verdadera reparación rápida del trabajador, se puedan cumplir.

Dicho esto, voy a pedir permiso para insertar porque todas las propuestas mías del dictamen en minoría han sido acordadas en esa reunión que hemos mantenido. Si el pleno las acepta —las han explicado el senador Pais y la senadora que actuó como informante—, creo que estaríamos en condiciones de votar.

Sra. Presidente. — Gracias.

Tiene la palabra el señor senador Pereyra.

Sr. Pais. — ¿Me permite una aclaración?

Sra. Presidente. — Sí, senador Pais.

Sr. Pais. — Quiero aclarar que no hay artículo 17 bis; hay artículo 16, que modifica el 17 bis de la ley 26.773. Estaba pedido como 16.

Sra. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pereyra.

Sr. Pereyra. — Gracias, presidenta. Voy a ser muy breve.

Con respecto a la ley anterior —o sea, la 24.557—, quiero señalar los errores que tiene y que no podemos cometer estos mismos errores ahora.

Primero, en el tema de la prevención: las distintas actividades tienen mayor o menor riesgo, por lo tanto, creo que todos los manuales de procedimientos que se hacen en materia de riesgos de trabajo deben incluir la participación directa de las organizaciones sindicales de cada una de las actividades, que son profundas conocedoras de esto y lo pueden hacer en conjunto.

Nosotros tenemos una experiencia muy linda en la actividad petrolera donde, en cada uno de los manuales de las distintas actividades dentro del área petrolera, participan los delegados de las organizaciones sindicales y hemos reducido los accidentes de trabajo en casi un 70 o un 80 por ciento. Así que esto hay que tenerlo en cuenta en la reglamentación para dar esta participación porque ha dado resultados altamente positivos.

Con respecto a la judicialización de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, coincido plenamente con el senador Pais en que hay que atacar las causas porque aquí es donde están los temas principales que hacen a los riesgos del trabajo y a la judicialización de los temas.

Las enfermedades profesionales no son reconocidas por las ART en su gran mayoría y se arma un debate muy grande en ese sentido. Estas ART también se niegan a hacer los exámenes periódicos. Hay que hacer un seguimiento de cada una de las enfermedades profesionales que están latentes en cada una de las actividades. Lo cierto es que los exámenes periódicos se limitan únicamente a hacer una radiografía, cuando en realidad hay que atacar el tema de esa actividad que está desarrollando el trabajador y los riesgos que tiene. Por ejemplo, a un trabajador que está expuesto a ruidos permanentes se le hace una radiografía de tórax, cuando tienen que hacerle una audiometría y todos los estudios con relación a los problemas que afectan al trabajador; o, cuando está expuesto a gases, hay que hacer estudios de las vías respiratorias. Hay trabajadores que están expuestos a tareas que tienen serios riesgos y las empresas se limitan a hacer exámenes que no dan ningún tipo de resultado.

Así que quería hacer hincapié en esto porque nos encontramos con problemas muy serios en la práctica, más allá de lo que dice la legislación.

También hay problemas con el tema de la derivación que se hace a las obras sociales, que tienen que hacer frente a la atención médica del compañero trabajador. La ART tiene que pagar a la obra social, pero tenemos que tener en cuenta que las obras sociales tienen contratos con los prestadores médicos por montos muy menores a los que paga la ART. Entonces, ¿qué hace la ART? Los derivan a la obra social y paga a valores de obra social cuando tiene que pagar al valor de la ART. Esa es una trampa que tienen para reducir sus costos y estamos acostumbrados a ver esto permanente.

Así que yo quería hacer esta observación.

Más allá de que han trabajado los senadores abogados que tiene nuestro Senado —que lo han hecho muy bien—, esto es lo que nosotros vemos en la práctica y hay que tener en cuenta en la reglamentación.

Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador “Pino” Solanas.

Sr. Solanas. – Muchas gracias, señora presidenta.

¿Cinco minutos hay?

Sra. Presidente. – No, se ha extendido el tiempo. Así que si quiere hablar un poquito más... ¡Siete le doy!

Sr. Solanas. – Bueno.

De todas maneras, pido permiso para leer algunos párrafos, así acorto.

Sr. Romero. – ¿Podemos cerrar la lista de oradores?

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Faltan solamente Rodríguez Saá y Martínez, nada más.

Sr. Solanas. – Se ha instalado una cierta campaña mediática para apoyar una acción contra la supuesta industria del juicio. El objetivo expreso de este proyecto es eliminar significativamente la litigiosidad que ha venido caracterizando al sistema.

Por supuesto, a lo que debemos aspirar legítimamente es a reducir los riesgos de los siniestros laborales para que no tengamos víctimas o trabajadores que estén obligados a pleitear a efectos de obtener la reparación de los daños que han sufrido. Entonces, por supuesto que acá debemos juzgar si realmente esta ley ataca, enriquece y garantiza a los trabajadores mejores condiciones, y satisfactorias, para eliminar o reducir los accidentes y las enfermedades laborales.

Un camino lógico para evitar esta litigiosidad sería atacar y, desde luego, el ideal sería suprimir las verdaderas causas. Por ejemplo, el rechazo sistemático de la inmensa mayoría de las enfermedades de origen laboral. Del total de los siniestros que ingresan al sistema, solo el 3 por ciento son enfermedades profesionales.

Otro tema sería la injustificada negativa de las ART a cubrir las reagravaciones, las altas médicas apresuradas, las deplorables prestaciones en especie, el permanente maltrato de los prestadores de las ART, las reparaciones miserables de los daños sufridos y todo esto reeditado por las sucesivas correcciones realizadas por todos

los gobiernos en estos veinte años. Decreto 1.278/00, decreto 1.694/99...

Sra. Presidente. – Senador: le solicita una interrupción la senadora Negre de Alonso.

Sr. Solanas. – Sí, cómo no.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señora presidente: le quiero decir al senador Solanas que el tema del reagravamiento es lo que acaba de explicar el senador Pais y que ya fue incorporado. Era un déficit del proyecto y fue incorporado expresamente.

Sra. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Solanas.

Sr. Solanas. – Me disculpo por haber llegado tarde a la intervención del compañero Pais.

Decía de las reparaciones mezquinas, la morosidad en el trámite administrativo ante las ART, las comisiones médicas y las indemnizaciones que terminan pulverizadas por el proceso inflacionario. Estos son los datos concretos.

El camino del Poder Ejecutivo nacional, y sin conocer las últimas modificaciones que se hicieron, es diferente en lo que hace a atacar la litigiosidad. En definitiva, termina dificultando y dilatando al extremo el acceso a las víctimas a la Justicia y los obliga a transitar un enrevesado procedimiento médico administrativo, condición *sine qua non* para un tardío reclamo judicial.

En realidad, se pretende que la actuación de las comisiones médicas sea previa, obligatoria y excluyente de otra intervención. Y este tema colisiona expresamente con los planteos que hizo la Corte Suprema de Justicia que, constitucionalmente, lo cuestionó en los casos “Castillo”, “Marchetti”, “Obregón” y otros.

Las comisiones médicas de la ley de ART son órganos federales y administrativos que asumen o avanzan sobre evidentes funciones jurisdiccionales. Por lo tanto, el sistema pone a profesionales del arte de curar a decir todo lo que debe ser en derecho y justicia. Transforma las comisiones médicas en órganos inconstitucionales. En las ART, los miembros de las comisiones médicas actúan como jueces y emiten resoluciones de sustancia jurisdiccional sin tener los conocimientos y la preparación para el caso.

Nos deberíamos preguntar: ¿cómo harán las comisiones médicas para resolver si un accidente es *in itinere* y qué criterio utilizarán para decidir si un siniestro ocurrió en ocasión y no por el hecho del trabajo?

Sra. Presidente. – Senador: le solicita una interrupción el senador Pais.

Sr. Solanas. – Sí, adelante.

Sra. Presidente. – Para una aclaración tiene la palabra el señor senador Pais.

Sr. Pais. – Señora presidente: justamente, esta es una de las críticas que le hicimos al proyecto y, por eso, hemos incorporado necesariamente la participación de un abogado para que este coadyuve, juntamente con los profesionales médicos que van a determinar sobre el grado de discapacidad o la lesión, en el análisis de las causales jurídicas y las consecuencias de una enfermedad o accidente de trabajo. Porque, es cierto, esta era una de las críticas que le hicimos y de ahí la modificación del proyecto. Ahora está contemplado en las modificaciones introducidas en la comisión.

Sra. Presidente. – La senadora Negre de Alonso también le solicita una interrupción.

Sra. Negre de Alonso. – Con respecto al tema de la inflación, se incorpora expresamente el índice RIPTE. Es decir, actualizar mes a mes por el índice RIPTE.

Sra. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Solanas.

Sr. Solanas. – Gracias senador Pais y senadora Negre de Alonso.

El tema es también quién nombra a los abogados. Si los nombra el Poder Ejecutivo o las víctimas.

Sra. Presidente. – Le solicita una nueva interrupción el senador Pais.

Sr. Pais. – Estimada presidente: ahora hemos previsto que el trabajador tenga la necesidad de que participe en el proceso con patrocinio letrado y, además, ese abogado que podrá contratar el trabajador tendrá los gastos a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo. Y será conforme la legislación arancelaria provincial.

Está bien que el Estado ponga en el ejercicio de potestades jurisdiccionales administrativas a médicos y hasta a un abogado, pero el control de esa comisión médica jurisdiccional estará a

cargo del trabajador, quien va a estar necesariamente asesorado por un abogado. En consecuencia, si el fallo judicial le es perjudicial, va a poder apelar a la comisión médica central o a la comisión jurisdiccional.

Estas fueron, justamente, parte de las críticas que hemos receptado en comisión y que fueron formuladas por las centrales sindicales y las asociaciones de abogados y que han sido introducidas en la norma mediante más de doce artículos.

Sra. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Solanas.

Sr. Solanas. – Claro, no estando en la comisión, no estoy en conocimiento de todas las modificaciones. Además, muchas se han hecho acá.

Hago una intervención en base al proyecto que teníamos que tratar. De todas maneras, no querría seguir con algo que tenga que ver o no con el proyecto actual. El proyecto que debíamos tratar y al cual yo me refiero tiene todo el perfume de ser una variante más de la flexibilización de las leyes que atienden los derechos del trabajador en el caso de siniestros, enfermedades, etcétera. Por lo tanto, desde Proyecto Sur tenemos toda la intención de oponernos a la norma, porque no se coloca desde el punto de vista de la realidad que vive el trabajador frente al hecho doloroso y trágico de sus accidentes o enfermedades.

Sra. Presidente. – Debe hacer uso de la palabra el senador Rodríguez Saá, pero no lo veo.

Continúa en el uso de la palabra el senador Martínez.

Mientras, se irá llamando al resto de los senadores.

–Se llama para votar.

Sr. Martínez (A. A.). – Señora presidente: llámelos, porque soy de hablar poco. Trataré de sintetizar.

Lo importante de esto es que al proyecto original se le han hecho más de veinte modificaciones. Incluso, sobre el dictamen de comisión se han hecho doce modificaciones que se han tratado en el recinto y que buscan enriquecer el proyecto.

Como decía la senadora Negre de Alonso, no se trata de una nueva ley, sino que se trata de una ley complementaria de la ley original y donde

hemos puesto, en cada una de las charlas que hemos tenido –y esto fue corroborado, por supuesto, esencialmente por la participación de la CGT– el compromiso de que debíamos avanzar en aquellas cosas, para evitar las consecuencias. No solamente las consecuencias que estamos planteando ahora con esta modificación, dándoles mayores posibilidades a los trabajadores, sino atacando las causas.

En ese sentido, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo es la que tiene el poder de policía para llevar adelante todo este tipo de situaciones y puede extenderse en todo el país y avanzar en forma conjunta, como lo hace con algunos sindicatos. El senador Pereyra nos contaba que hemos visto experiencias al respecto, incluso de la UOCRA, donde a través de los distintos convenios colectivos se han unido para trabajar en los mecanismos de prevención. Yo creo que este debería ser uno de los objetivos clave que deberíamos llevar adelante. Pero lo importante es ver en qué cosas se ha podido avanzar en este tipo de cuestiones. Han venido, como bien dijo el senador Pais, abogados, gente de las aseguradoras y trabajadores, o sea, realmente hemos tenido una participación tremendamente activa.

De entrada se nos habló que era para evitar la litigiosidad. Lo importante de esto es que se establecen los mecanismos claros y concretos para que aquel trabajador que tenga una enfermedad o un siniestro tenga la posibilidad concreta de tener un resguardo legal y que ese resguardo sea elegido por el trabajador. A su vez, esos honorarios van a tener que ser pagados por la ART, para que el trabajador tenga la garantía de que en las comisiones que se llevan adelante los casos –las comisiones médicas– se incorporen abogados como profesionales, a fin de poder realmente tener en cuenta la complejidad de lo que hoy se está analizando.

Existían cuestiones –como habíamos dicho– realmente importantes en la ley de administración de la comisión médica, como el autoseguro público provincial. Es muy relevante el hecho de poder avanzar reglamentadamente y que esto pueda ser extendido también a los municipios. Y para estos también es saludable que puedan tener un marco legal para avanzar en ese sentido.

También es importante mencionar el tema de la prevención, que es lo que decíamos, y el ordenamiento del sistema. Hoy conocemos la

posibilidad, a partir de la sanción de esta ley, que tiene el trabajador de elegir el lugar donde va a litigar, pero antes, por ejemplo, con los traslados tan habituales en distintos trabajos, era muy difícil que el trabajador pudiera litigar en el lugar de su domicilio y tenía que hacerlo habitualmente en el lugar del accidente, cuando sabemos que esto complica realmente al trabajador para llevar adelante este tipo de cuestiones.

Por otra parte, se cumple con lo que tiene que ver con la determinación del ingreso base. Creo que esto también es sumamente importante, porque nos pone en línea con lo que es el Convenio 95 de la OIT. Creo que es sumamente importante poder hacer esto, de la manera y en la forma automática en que se hace.

El mecanismo de la actualización a través del RIPTE también es importante, porque en procesos como el que vivimos, tenemos una inflación importante y se debe garantizar el mantenimiento de lo que tiene que ser la gratificación que tiene que tener el trabajador cuando está haciendo estas cuestiones.

Todo esto, de alguna manera, nos llevó a que hayamos podido elaborar este proyecto, que debo rescatar que contó con el trabajo previo que se hizo en la comisión que preside el senador Lovera y con el trabajo que luego se hizo en estos días entre el senador Pais, la senadora Negre de Alonso y los distintos aportes que se pudieron hacer para poder llegar hoy a tener la posibilidad concreta de sancionar esta norma que realmente es muy importante.

Hace mucho tiempo que aquellos que estamos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social veníamos planteando la necesidad de tener leyes que contemplaran las mejoras lógicas y naturales, porque como bien explicaba el senador Pais –y no me voy a extender en esto–, las ART son muy remisas a reconocer las enfermedades y lo que tiene que ver la atención dineraria y de obra social que deben atender a través de las distintas prestaciones. Por eso, realmente creo que este es un paso muy importante.

Repito lo que dije al comienzo: esencialmente, esto tiende a atacar las consecuencias de lo que ocurre en la legislación laboral, pero lo que tenemos que hacer –y creo que es el compromiso– es sancionar leyes para poder atacar las causas y poder determinar que aquellas preven-

ciones que tienen que llevarse adelante deben ser hechas y de la manera más racional posible.

En ese sentido, vuelvo a citar el ejemplo de lo que tiene que ver con los trabajadores del petróleo o de la UOCRA, donde la participación de los trabajadores fue la que llevó adelante la posibilidad de bajar los riesgos de cada actividad laboral.

Así que con estos términos y teniendo el quórum necesario, pido que nos acompañen en la sanción de este proyecto de ley.

Sra. Presidente. – Muchas gracias, señor senador.

Tiene la palabra el senador Lovera, quien quería decir algo.

Sr. Lovera. – Señora presidenta: simplemente quiero decir que había un pedido para hacer un par de correcciones y no sé si lo van a pedir ahora...

Sra. Presidente. – Ahora vamos...

Sr. Lovera. – Y quiero pedir permiso para insertar, atento que ya Mario Pais ha sido quien ha fundamentado el proyecto por nuestro bloque.

Sra. Presidente. – Se va a votar la autorización de las inserciones y los pedidos de abstención, porque no lo hicimos hoy.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.¹²

Tiene la palabra la senadora Odarda.

Sra. Odarda. – Solicito autorización para abstenerme en esta votación.

Sra. Presidente. – ¿Quiénes se van a abstener en la votación, además de la senadora Odarda? ¿Solamente Odarda? Perfecto.

La propuesta es la siguiente: votar en general en una sola votación y, luego, artículo por artículo...

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pinedo.

Sr. Pinedo. – Hay modificaciones en varios artículos. Supongo que se leerán. De todas maneras, quiero hacer un par de correcciones muy chiquitas en dos artículos que voy a mencionar

en particular. Así que le voy a pedir la palabra cuando se traten los artículos 1º y 11.

Sra. Presidente. – Yo propongo lo siguiente, a ver si les parece bien, para hacer la votación lo más rápido posible: como la senadora Rodríguez Machado leyó todas las modificaciones, ¿por qué no agregamos las dos o tres que faltan y después votamos todo junto?

Senador Pinedo, ¿puede exponer las dos que tiene ahora?

Sr. Pinedo. – En el artículo 1º, estuve hablando con el senador Pais, en el primer párrafo, la eliminación del término “homologue”. ¿Está?

Sr. Lovera. – Sí, sí.

Sr. Pinedo. – Y ahí tengo una pequeña modificación que hacer al final del artículo 1º, último párrafo, cuando habla de los honorarios profesionales y de los gastos como consecuencia de la participación en las comisiones médicas. Le voy a pedir al presidente de la comisión una modificación que diga que estarán a cargo de las respectivas aseguradoras de riesgos del trabajo conforme con la reglamentación, porque ha quedado una redacción absolutamente abierta y me parece que es prudente. Lo hablamos cuando lo discutimos...

Sra. Presidente. – Perfecto. ¿Se acepta?

Sr. Pinedo. – Y después, en el artículo 11...

Sra. Presidente. – Perdón, senador.

Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Los honorarios son de conformidad a las leyes arancelarias respectivas, o sea, son provinciales. O de acuerdo a la ley nacional, si fuera federal. Entonces, no podría la reglamentación modificar ni reglamentar eso. Serían las jurisdicciones locales las que tienen que establecerlo. Es competencia de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Así que no habría forma de reglamentar eso.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pinedo.

Sr. Pinedo. – Les puedo proponer: “conforme las normas reglamentarias”. ¿Les parece bien? Porque incluye gastos también. Si le parece bien a la señora senadora, yo propondría eso: “conforme a las normas reglamentarias”.

Y después, en el artículo 11...

Sra. Presidente. – Un momento, senador.

Tiene la palabra el senador Pais.

12 Ver el Apéndice.

Sr. Pais. – Mire, presidenta: la verdad es que no correspondería. El presidente de la Nación tiene la potestad de reglamentar este artículo, lo digamos o no, pero si le establecemos una condición de reenvío, estamos nosotros haciendo casi una suerte de delegación. El artículo 93, inciso 2, dice que en este artículo, si el presidente de la Nación quiere, en función de las potestades que le son propias –no de este Congreso–, reglamentar, que lo haga. Pero dejémoslo así. Nosotros estamos trayendo una manda. Lo que estamos diciendo es que los gastos y los honorarios son a cargo de las ART.

Los honorarios serán determinados conforme a las legislaciones provinciales y los gastos son aquellos en los que incurra el trabajador. Lo demás, de reglamentarlo, es una potestad del presidente. No la digamos expresamente, porque estaríamos condicionando esta aceptación y esta disposición por parte del Congreso. Por eso no vamos a aceptar esa modificación de la última parte.

Sra. Presidente. – Perfecto.

Senador Pinedo, ¿tiene alguna otra que leer?

Sr. Pinedo. – Sí. En el artículo 11 también hay un problema –me parece– vinculado con el carácter de seguro que tiene el sistema general de riesgos del trabajo.

El artículo 11, originalmente pactado con el apoyo de la CGT y con el dictamen, establecía que el ingreso base se calculaba sobre cuatro salarios normales y habituales. Y hemos acordado, los señores senadores que intervinieron en las observaciones y la comisión, cambiar ese criterio por los salarios devengados durante el año anterior, o sea, doce meses, y eso actualizado por el RIPTE, que es el índice general de salarios.

La referencia al Convenio 95 de la OIT me parece que agrega un factor de ambigüedad e incertidumbre en el cálculo del salario base, a los efectos del seguro, porque establece básicamente que todas las remuneraciones que se perciban por cualquier concepto se consideran salario. Y no estoy en contra de eso, pero si hay dudas sobre cuál es el contenido del salario, es difícil a los efectos del aseguramiento.

Yo le sugeriría a la Presidencia de la Comisión si acepta que digamos lo mismo: “Para

el ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados por el trabajador durante el año anterior...”, lo del RIPTE y todo lo demás, y que eliminemos la referencia al Convenio 95 de la OIT. Esa es mi propuesta.

Sra. Presidente. – Senador Lovera, ¿acepta?

Sr. Lovera. – Sí. Estoy haciendo una consulta, sobre todo, con los senadores que estuvieron trabajando.

Sra. Presidente. – Senador Pais.

Sr. Pais. – Es un tema de absoluta importancia, porque el artículo 1º del Convenio 95 de la OIT es el que define lo que es salario.

Nosotros estamos hablando de salario sin definirlo. El Convenio 95 lo define y determina nuestra Corte Suprema de Justicia, en varios fallos –especialmente, en el último, “Díaz c/ Cervecería Quilmes”–, que ese concepto de salario es una norma que se les impone en la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es en coincidencia con el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, que define lo que es salario. Porque salario no es cualquier cosa. Salario es, justamente, lo que recibe el trabajador como contraprestación por su trabajo personal. Estamos poniendo una norma que vincula el ganancial del trabajador, como producto de su trabajo, con la indemnización. Cuando queremos escamotear esto o disimularlo, o no decirlo explícitamente, no estamos haciendo las cosas bien.

Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el Convenio 95 de la OIT, que ha sido ratificado, es una norma de jerarquía supralegal, es decir, está por sobre esta ley. Lo que estamos haciendo es una mera referencia de reenvío. Después, corresponderá –a lo mejor, reglamentariamente y sin desnaturalizar, porque así también dice la Constitución– que el Poder Ejecutivo reglamente y especifique esta norma, pero cuidando de no alterar su espíritu y su naturaleza.

Estamos, justamente, ratificando con mucha fuerza qué es el salario. Y ese salario está definido ya por una ley de jerarquía superior, que se denomina supralegal.

Sra. Presidente. – Perfecto. Entonces, no se acepta, senador Pinedo. Lamento.

Con las reformas al dictamen que propuso el miembro informante y la senadora Rodríguez Machado, vamos a hacer una sola votación, en general y en particular.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. — Sí. Senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Que la senadora Rodríguez Machado lea lo que le quedó, que es el inciso 3 del artículo 11.

Sra. Presidente. — ¿Lo va a leer, senadora?

Sra. Rodríguez Machado. — Lo tiene el secretario.

Sra. Presidente. — Lo tiene Secretaría. Perfecto.

Sr. Secretario (Tunessi). — Obran en poder de esta Secretaría las reformas que leyó el miembro informante.

Sra. Presidente. — Con las reformas que obran en Secretaría. Perfecto.

Entonces, ahora, vamos a votar, en general y en particular, todo junto.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). — Resultan afirmativos, 48 votos; negativos, 2 votos; 1 abstención.

—El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹³

Sra. Presidente. — Aprobado y se enviará a la Cámara de Diputados.

Les pido un segundo para decirles que les agradezco enormemente el esfuerzo del año y felicito a todos ustedes por el trabajo que han realizado. Perdón si he tenido algunas cosas que corregir para el año que viene. Pero, bueno, trataremos de superarnos todo el tiempo.

Muchas gracias. Felices fiestas para todos.

—Son las 17 y 41.

JORGE A. BRAVO

Director General de Taquígrafos.

13 Ver el Apéndice.

Proyecto: ORDEN DEL DIA 1328**Descripción:** SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR**Tipo Quorum:** MAS 1/2 MC**Fecha:** 21/12/2016 17:40:43**Acta :** 7**Mayoría:** MAS 1/2**VOTOS EMITIDOS****Miembros del cuerpo:** 72**Votación:** NOMINAL**Presidente:** MICHETTI, Gabriela**Presentes:** 51 **Ausentes:** 21 **AMN:** 26


Afirmativos: 48
Negativos: 2
Abstenciones: 1
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abal Medina, Juan Manuel	SI	14	37. Leguizamón, María Laura	SI	37
2. Aguilar, Eduardo Alberto	SI	53	38. Linares, Jaime	NO	46
3. Aguirre, Hilda Clelia	SI	2	39. Lovera, Daniel Aníbal	SI	6
4. Almirón, Ana Claudia	AUSENTE		40. Luenzo, Alfredo Héctor	SI	70
5. Alperovich, José Jorge	SI	17	41. Luna, Mirtha M. T.	AUSENTE	
6. Barrionuevo, Walter Basilio	SI	4	42. Marino, Juan Carlos	SI	20
7. Basualdo, Roberto Gustavo	SI	64	43. Martínez, Alfredo Anselmo	SI	40
8. Blas, Ines I.	AUSENTE		44. Martínez, Ernesto Félix	SI	67
9. Boyadjian, Miriam Ruth	SI	72	45. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
10. Brailard Pocard, Pedro	SI	65	46. Menem, Carlos Saúl	AUSENTE	
11. Cabral, Salvador	AUSENTE		47. Mera, Dalmacio	SI	59
12. Caserio, Carlos Alberto	SI	71	48. Mirkin, Beatriz Graciela	SI	8
13. Castillo, Oscar Anibal	SI	44	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	25
14. Catalán Magni, Julio César	SI	52	50. Negre de Alonso, Liliana Teresita	SI	39
15. Cobos, Julio	SI	21	51. Odarda, María Magdalena	ABS.	48
16. Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		52. Ojeda, José Anatolio	SI	58
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	69	53. Pais, Juan Mario	SI	35
18. De la Rosa, María G.	SI	18	54. Pereyra, Guillermo Juan	SI	62
19. Durango, Norma Haydee	SI	7	55. Perotti, Omar Angel	SI	60
20. Elias de Perez, Silvia Beatriz	SI	42	56. Pérsico, Daniel Raúl	AUSENTE	
21. Espínola, Carlos Mauricio	SI	33	57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos	SI	43
22. Fellner, Liliana Beatriz	AUSENTE		58. Pichetto, Miguel Ángel	SI	15
23. Fernández Sagasti, Anabel	AUSENTE		59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	AUSENTE	
24. Fiore Viñuales, María C. del Valle	SI	26	60. Pinedo, Federico	SI	68
25. Fuentes, Marcelo Jorge	AUSENTE		61. Reutemann, Carlos Alberto	AUSENTE	
26. García Larraburu, Silvina Marcela	AUSENTE		62. Riofrío, Marina Raquel	AUSENTE	
27. García, Virginia María	AUSENTE		63. Rodríguez Machado, Laura Elena	SI	23
28. Giacoppo, Silvia del Rosario	AUSENTE		64. Rodríguez Saá, Adolfo	AUSENTE	
29. Giménez, Sandra D.	AUSENTE		65. Romero, Juan Carlos	SI	19
30. Godoy, Ruperto Eduardo	SI	34	66. Rozas, Ángel	SI	22
31. González, Nancy Susana	SI	9	67. Sacnun, María de los Angeles	AUSENTE	
32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel	SI	32	68. Solanas, Fernando Ezequiel	NO	47
33. Irrazábal, Juan Manuel	SI	36	69. Urtubey, Rodolfo Julio	SI	5
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa	SI	30	70. Varela, Marta	SI	66
35. Kunath, Sigrid Elisabeth	SI	56	71. Verasay, Pamela	SI	45
36. Labado, María Ester	AUSENTE		72. Zamora, Gerardo	AUSENTE	

Observaciones: Se aprueba con modificaciones.

nalidad, y, derivado de ello, la consecuente pérdida de legitimidad ante la sociedad.

Fruto de ello, este impuesto dejó de tener como aportantes exclusivos a un número acotado de personas remuneradas en relación de dependencia –los de mayores ingresos– y comenzó a afectar en forma paulatina a crecientes contingentes de trabajadores de todas las actividades y hasta a los jubilados.

Esta tendencia se vio agravada por el congelamiento de las escalas salariales sobre las que se aplicaron las alícuotas, que provocaba que en cada aumento de haberes ingresaran nuevos e injustificados contribuyentes.

A través de estos mecanismos se calcula que en la actualidad este impuesto afecta a casi un millón y medio de trabajadores en relación de dependencia, sumándose un número cercano al medio millón de jubilados.

Por lógica, cabe esperar que el impuesto a las ganancias cumpla con lo que es en su esencia: la progresividad, y hacia eso proponemos encaminarnos. No es lo que ocurrió hasta ahora.

Antes de adentrarme en el sentido de mi voto, quiero decir que me sumo a las voces que reclaman una reforma tributaria general que ponga equidad a nuestro sistema impositivo.

En tal sentido, entiendo que en esa oportunidad deberán analizarse los mecanismos apropiados para lograr una mayor equidad entre los distintos tipos de hogares, considerando, por ejemplo, la posibilidad de que los hogares monoparentales computen las deducciones por carga de familia al doble.

Puntualizando en el proyecto que estamos tratando, desde ya adelanto mi voto favorable, ya que entiendo que pondrá una dosis de racionalidad a una situación de injusticia, percepción que compartió todo el arco político en la última campaña electoral.

El texto que nos encontramos tratando es notablemente superador del mezquino proyecto que envió el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

Vemos así con especial satisfacción que se haya abandonado la injusta exclusión de la deducción por cónyuge que proponía el oficialismo, que se haya incluido la actualización anual de los valores de las deducciones y de las escalas a través del índice RIPTE y que, en lo que parece un milagro, el costo fiscal de la nueva norma no recaiga sobre las arcas provinciales.

Ya desde nuestra pertenencia regional celebramos también el cómputo de un 22 % adicional para los contribuyentes patagónicos, beneficio sobre el que una vez más debemos explicar nuestras desventajas comparativas con otras regiones ante funcionarios que livianamente hablaron de un privilegio.

Por otra parte, la convicción con la que votaré seguidamente viene reforzada por mi pertenencia partidaria e ideológica y por el mandato que recibí de mis compatriotas para ocupar esta banca.

El peronismo, desde todos sus sectores y desde todas sus miradas, ha aportado a un proyecto que, sin ser el

ideal, logró que el Poder Ejecutivo nacional, después de las migajas que ofreció en su propuesta original, apelara finalmente al diálogo uniendo la CGT, la oposición y el oficialismo en una mesa para lograr un acuerdo. Valoramos ese camino de diálogo y deseamos que sea el inicio de una forma de plantear el tratamiento de las cuestiones importantes para la ciudadanía.

Mi gobernador, Carlos Verna, ha manifestado su acuerdo con el proyecto venido en revisión de Diputados y ha respaldado también esta nueva propuesta. En línea con esa posición vamos a acompañar este texto que ha ganado en racionalidad y, además, ha sido fruto del referido consenso.

El gobernador Verna no estuvo presente en la reunión de gobernadores en la que se trató este tema porque está desde ayer con una urgencia ambiental, encabezando una movilización provincial en defensa de los derechos pampeños sobre los ríos interprovinciales en general y el río Atuel en particular, una movilización que unió las localidades pampeanas de Santa Isabel y Algarrobo del Águila, con columnas procedentes de los cuatro puntos cardinales de la provincia y que terminará las 19 de hoy reuniendo en torno a la plaza de cada pueblo pampeano a la comunidad que sigue reclamando por el uso compartido de las aguas del interprovincial río Atuel, porque el Atuel también es pampeano. Necesitamos que el gobierno nacional de una vez por todas tome cartas en el asunto para terminar con este padecimiento.

Para finalizar, quisiera mencionar que nuestro voto viene, además, avalado por los órganos partidarios del peronismo pampeano al que orgullosamente pertenezco. Debo citar aquí la declaración que lleva la firma del doctor Marín, presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista de La Pampa, que destaca: “Éstos son momentos en que el justicialismo, fiel a su concepción doctrinaria, debe encabezar toda iniciativa que tenga como objetivo privilegiar los intereses de los trabajadores”.

4

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MONTENEGRO

Ley complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo (O.D. N° 1.328/16 y anexo)

Señora presidente:

Este proyecto que estamos considerando es fruto del diálogo del Poder Ejecutivo, la Confederación General del Trabajo (CGT) y los senadores de diversas bancadas; por ello voy a votar en forma positiva.

Es bueno que el oficialismo y toda la sociedad sepan que el consenso y el disenso forman parte de la democracia. También hoy debemos terminar con la lógica amigo-enemigo que tanto mal nos hizo en el pasado.

En la Comisión de Trabajo y Previsión Social tomamos las decisiones dialogando los senadores y

senadoras y escuchando a los trabajadores. En dicho marco el compañero Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, asistió a la Comisión de Trabajo y realizó aportes importantes al proyecto, que fueron tomados en este dictamen.

Esta ley de ART es un avance. Es una ley perfectible; por eso los legisladores, como representantes de los trabajadores, debemos estar muy atentos para que se cumpla y que el Poder Ejecutivo invierta los recursos suficientes.

Con respecto al proyecto, quisiera señalar las siguientes cuestiones.

En primer lugar, la necesidad de una cultura de la protección y de la prevención laboral.

En la Argentina se habla mucho de la necesidad de recuperar la cultura del trabajo. Yo estoy de acuerdo en ello, pero a la vez debemos implementar una cultura de la prevención y de la protección laboral.

En el derecho al trabajo está en juego el derecho a la vida y el derecho a la salud. Hace algunos días falleció por un accidente laboral Matías Kruger, un trabajador que resultó electrocutado mientras realizaba tareas en los talleres de la línea H de subte.

Matías era un joven trabajador que se hizo conocido por el paro de subte, era un joven trabajador con sueños y con ganas de progresar. Hay miles de Matías anónimos que fallecen en accidentes laborales. Hay cientos de miles de trabajadores que sufren problemas de salud y discapacidades.

No queremos ningún trabajador menos por los despidos. Tenemos que decir con toda claridad que tampoco queremos ni un trabajador menos por un accidente laboral. Ni un trabajador menos por la falta de la cultura de la protección laboral y de la prevención laboral.

También tenemos el deber moral de defender a las familias de las víctimas de los accidentes laborales. Un trabajador que fallece o sufre problemas de salud o de discapacidad deja a una familia en una grave situación de vulnerabilidad social y por eso, como Estado, debemos protegerlas. Tenemos que ser muy claros: la Argentina necesita una política de Estado de protección y prevención laboral, tema que también se debatió en la Comisión de Trabajo como una de las principales preocupaciones de la CGT y que es uno de los principales cambios que hicimos al proyecto del Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo, en el artículo 19 del proyecto, redactaba: “La Superintendencia de Riesgos del Trabajo deberá remitir al Comité Consultivo Permanente creado por el artículo 40 de la ley 24.557 y dentro del plazo de un (1) año...”. La CGT y los senadores propusimos que el proyecto de ley de protección y prevención laboral se realice en un plazo de tres meses, no de un año como quería el proyecto original, agregando que los principios generales de la ley “sean ajustados en forma específica para cada actividad, a través de los convenios colectivos de trabajo”.

El senador Pereyra manifestó en la comisión que es clave la participación de los trabajadores en la elaboración del proyecto de ley, en especial cuando se trata de las actividades de alto riesgo, porque son los trabajadores quienes más saben de las medidas necesarias para la protección y la prevención de los accidentes de trabajo.

Yo quiero dejar constancia de que no es el proyecto ideal, pero sí este dictamen, que modifica el proyecto original, mejora considerablemente lo que hoy tenemos, y que la Comisión de Trabajo y Previsión Social el año próximo deberá tener un rol activo en la presentación de propuestas para que tengamos la mejor ley de protección y prevención de los accidentes de trabajo. También asumimos el compromiso de tener un rol activo en el control de la implementación de un plan nacional para la protección y la prevención de los accidentes de trabajo, que el Poder Ejecutivo debería implementar en forma urgente y con los recursos suficientes.

En segundo lugar, el autoseguro público. Un avance importante.

En cuanto a las provincias y las consultas que hemos hecho –en mi caso, aludiendo a la provincia de La Pampa–, estamos de acuerdo con unificar criterios y con este autoseguro público provincial que se propone, atento a que hoy lo que está pasando es que lo que no pagan las ART lo pagan las obras sociales y, en el caso de los trabajadores estatales, lo pagan las obras sociales provinciales. Entonces, estamos de acuerdo en que lo mejor es unificar criterios y que haya una aseguradora provincial para que sea más previsible todo el funcionamiento del sistema. Asimismo, quiero resaltar lo que dijo el ministro Triaca en la reunión de la Comisión de Trabajo del 30 de noviembre, cuando reconoció: “Pasa mucho que las obras sociales cubren al trabajador cuando debían estar haciéndolo las ART y la recuperación de esos recursos en favor de las obras sociales para evitar el desfinanciamiento de las mismas”.

Y en tercer lugar, la urgente necesidad de fortalecer y ampliar las comisiones médicas.

Junto a mi voto positivo, quiero dejar constancia de mi solicitud al Poder Ejecutivo nacional de fortalecer y ampliar las comisiones médicas que, por lo que hemos visto, son pocas en todo el país y además están sobrecargadas y desbordadas de trámites.

Como señaló el compañero Daer en la reunión de la comisión: “Hoy pasa que hay veces que nuestros compañeros pasan dos años sin que se dirima si es una enfermedad profesional o si es un accidente de trabajo”.

También la CGT señalaba –y yo me uno a ese pedido– la necesidad de que “en todas las jurisdicciones territoriales en las que existen juzgados se pongan comisiones médicas”.

Por estos motivos, adhiriendo a los aportes efectuados por la senadora Negre de Alonso y por los senadores Pereyra y Pais, porque este proyecto modificado es fruto del consenso entre la CGT y el gobierno nacional

y es superior al originalmente presentado, voy a votar a favor.

5

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIACOPPO

Cuestión de privilegio (S.-4.922/16)

Señora presidente:

Pido la palabra para presentar una cuestión de privilegio pues algunos diputados nacionales del Frente para la Victoria (FPV) afectan mis fueros parlamentarios.

Represento a una provincia a la que aspiran a privarla de autonomía. Promueven en Diputados algunos integrantes del FPV, mediante el proyecto de ley 8.685-D.-2016, con total falta de decoro para con el Congreso Nacional, que sea el gobierno federal el que administre la provincia de Jujuy en sus tres poderes constituidos, a los cuales pretenden amputar en sus funciones o eliminarlos.

Es decir, reclaman la supresión en la provincia que represento de la garantía al goce y ejercicio de sus instituciones y con ello perturban el ejercicio de mi mandato como legisladora en este Senado, la casa de las provincias.

De esta forma afectan también al Senado de la Nación en su composición, pues una de las provincias que aquí se representa quedaría a la merced del gobierno central en sus tres poderes, todo ello bajo la falsa imputación de que allí no rigen los principios republicanos.

En el Congreso Nacional, los partidarios de la iniciativa (algunos diputados del FPV) se sienten más cómodos destituyendo los poderes legítimamente elegidos en mi provincia, para dar lugar allí al ejercicio directo del poder del gobierno federal.

El Frente para la Victoria prefiere que un delegado de Macri gobierne Jujuy, y proponen la intervención federal para sacar del poder al gobernador Morales, los legisladores provinciales y nombrar en comisión a los jueces locales.

Tan alterados están, que son ellos los que habilitan una corriente de pensamientos que puede llevar a justificar medidas similares en los propios gobiernos provinciales donde conservan la mayoría del poder.

Atropellan el sistema federal y las instituciones democráticas, ignoran la defensa del peronismo al que pertenecen. Eso pasa cuando algunos diputados se sienten acorralados en sus intereses personales, cuando tienen miedo al avance de las causas judiciales por corrupción.

Bien, son ellos quienes despiertan el otrora poder central hegemónico, donde se abusaba de esta figura con fines políticos, recurriendo justamente a esta causal. La historia da cuenta de lo que sostengo.

Flaco favor, reitero, le hacen pues estos diputados al resto de los gobernadores de las provincias argentinas.

Por ejemplo, pensemos en Formosa, donde el cacique Félix Días y su familia tienen resoluciones decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como medida cautelar por el riesgo a sus vidas y su seguridad personal, conforme el artículo 25 del reglamento de la CIDH.

O en Santa Cruz, donde la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) ha condenado a la Argentina, en su responsabilidad internacional, por no restituir en el cargo al procurador general –el doctor Eduardo Sosa–, maniobra con la cual aún hoy se encuentra afectada la independencia del Poder Judicial provincial. En este caso estamos hablando de una sentencia de la CIJ y no de recomendaciones.

Miren, alcanza simplemente con observar las estadísticas de la CIDH sobre las demandas (peticiones) por violación de derechos humanos por país y por año para ver que desde el año 2006 al año 2015 la Argentina ha estado habitualmente en el cuarto puesto, logrando alcanzar también en dos oportunidades el tercer puesto entre 35 países.

También estamos en un puesto muy alto en cuanto a pronunciamientos de la Corte Interamericana de Justicia o en el dictado de medidas cautelares (CIDH). En cuanto a las peticiones, nos superan Colombia, México o Perú, que se disputan los dos primeros puestos.

¿Por qué ante los hechos internacionales mencionados no presentaron un pedido de juicio político a los Kirchner o una intervención federal en su momento a Santa Cruz, en base a las opiniones de la CIJ o la CIDH?

Convendría, por lo tanto, que Raúl Eugenio Zaffaroni, el actual juez de la Corte Interamericana de Justicia, concentre allí sus funciones y no obstaculice con sus prejuizgamientos el normal funcionamiento del tribunal internacional, donde ya tenemos antecedentes tan negativos de condena internacional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el prejuizgamiento consiste en revelar con anticipación al momento de la sentencia una declaración de ciencia en forma precisa y fundada sobre el mérito del proceso, o bien que sus expresiones permitan deducir la actuación futura de un magistrado por haber anticipado su criterio.

A Zaffaroni le interesa más el ruedo político y la defensa de sus amigos que la salud institucional de la CIJ que integra. Este tema, por lo tanto, está plagado de intereses políticos tendientes a lograr la impunidad de quienes han perjudicado sistemáticamente los intereses generales del país.

Ya en el año 2012 Zaffaroni prejuizó sobre la situación de la señora Sala en la causa que se le sigue sobre escraches a Morales y a otros miembros de la Auditoría General de la Nación, iniciada en el año 2009 para evitar la investigación sobre el manejo de los fondos públicos por parte de la Túpac.

nistros, Maqueda, renunció a su cargo de senador para integrar la Corte en el año 2002.

Enfáticamente señalo que yo misma, como senadora de mi provincia, aseguro que todo integrante de organizaciones de derechos humanos puede constatar el respeto a la vigencia de los derechos humanos en mi provincia. Es más, queremos que así sea.

En el mismo sentido se ha pronunciado el gobierno local y nacional: vengan a Jujuy, cuantas veces quieran, conozcan las causas, hablen con Milagro Sala y también con quienes han sido sus víctimas (la lista de víctimas es larga, pero los familiares de Condorí, quien fue asesinado en Jujuy, son un buen punto de partida).

En Jujuy se vive en paz, eso han votado con una amplia mayoría de sus habitantes, y esa paz incluye derechos, democracia y sistema republicano de gobierno.

Por eso, cuando afectan la representación de una provincia, pisoteando su identidad, sus valores, sus deseos de vivir en paz y sus instituciones legítimamente elegidas se denigra también al propio Poder Legislativo nacional, porque algunos de sus miembros no tienen problema en manchar la honra del poder del que forman parte, con tal de anteponer sus intereses personales.

6

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA CREXELL

Ley complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo (O.D. 1.328/16 y anexo)

Señora presidente:

1. *Consideraciones preliminares*

El proyecto de ley en tratamiento introduce modificaciones vinculadas con el régimen sobre riesgos del trabajo.

El Poder Ejecutivo nacional, que tiene la iniciativa del proyecto, ha planteado como fundamento que el sistema de riesgos del trabajo, luego de varios años de funcionamiento, presenta fortalezas y debilidades y que resulta preciso mantener sus principales líneas directrices, pero se deben corregir cuestiones que han provocado situaciones inequitativas.

En los fundamentos del mensaje, luego de esa consideración, se alude a la necesidad de superar las objeciones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación planteó en los casos “Castillo, Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.”, del 7/9/04, y “Oberti, Pedro c/ Panziraghi, Santiago”, en los cuales se declaró la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo, 24.557, vinculado con la intervención obligatoria de las comisiones médicas previstas en el artículo 21 de ese ordenamiento y la jurisdicción federal que se establecía, la cual se consideró que no correspondía.

Se sostiene que, para superar las objeciones que sentó la Corte en los precedentes citados, el proyecto

contempla la necesidad de la adhesión de las provincias al sistema, delegando a la Nación las competencias necesarias para asegurarlo, en particular la sustanciación y resolución de procesos administrativos propios de las comisiones médicas vinculados con la decisión sobre la reparación de las contingencias que deben ser cubiertas en el ámbito de la Ley de Riesgos del Trabajo.

En función de ello, el proyecto plantea como modificación sustancial el reinstalar la obligatoriedad de la recurrencia previa y obligatoria al procedimiento de las comisiones médicas del sistema, que quedó de lado con los precedentes de la Corte.

Otra cuestión general que interesa mencionar es que la iniciativa plantea que en todos los casos deberá aplicarse el Listado de Enfermedades Profesionales contemplado en el decreto 658/96 y la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales prevista en el decreto 659/96.

Se introducen también una serie de modificaciones puntuales, pero lo sustancial del proyecto se refiere a lo anterior.

El objetivo central que se plantea es procurar disminuir la litigiosidad, sosteniéndose que las cuestiones referidas habrían motivado una proliferación de litigios individuales que ponen en riesgo la finalidad del sistema en general para asegurar reparaciones suficientes.

Adelanto, como luego lo desarrollaré, que los cambios propuestos no atienden efectivamente a esa finalidad. Además, resultan constitucionalmente objetables esas modificaciones, por lo cual entiendo no puedo acompañar el proyecto en su integralidad.

2. *Contenido del proyecto*

El proyecto se estructura en tres títulos, cuyo contenido se reseña seguidamente.

2.1. Título I, sobre normas complementarias de la Ley de Riesgos del Trabajo.

En primer lugar se plantean disposiciones de carácter complementario a las previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, 24.557.

En lo sustancial, a través de tales disposiciones se establece la obligatoriedad de la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales que contempla el artículo 51 de la ley 24.241, como instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para resolver con relación a los reclamos de otorgamiento de prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo. Se prevé que la resolución de esa comisión agotará la vía administrativa (artículo 1º).

Vinculado con ello se establece adicionalmente que:

–Las partes podrán solicitar la revisión de la resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional, ante la Comisión Médica Central (artículo 2º).

–La decisión de la Comisión Médica Central será susceptible de recurso directo, por cualquiera de las

partes, ante los tribunales de alzada del fuero laboral (artículo 2°).

–El trabajador tendrá además la opción de interponer un recurso ante la Justicia ordinaria del fuero laboral respecto de la resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional. Este recurso atraerá el que hubiere interpuesto la aseguradora ante la Comisión Médica Central (artículo 2°).

–Los recursos procederán en relación y con efecto suspensivo (artículo 2°).

–Las resoluciones de las comisiones que no fueren objeto de recurso pasarán en autoridad de cosa juzgada (artículo 2°).

–Las medidas de prueba serán gratuitas para el trabajador (artículo 2°).

–Los peritos médicos oficiales que intervengan en procesos judiciales deberán integrar el cuerpo médico forense de la jurisdicción o entidad equivalente; sus honorarios no serán variables, ni vinculados a la cuantía del juicio y su regulación responderá a la labor realizada (artículo 2°).

–No podrán ser objeto de pactos de cuota litis los procesos vinculados a esta temática (artículo 2°).

–Se crea el Servicio de Homologación en el ámbito de las comisiones jurisdiccionales para sustanciar los acuerdos por incapacidades (artículo 3°), estableciéndose sus funciones y procedimiento (anexo I de la ley). Además, se prevé que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dictará normas de procedimiento ante las comisiones médicas (artículo 3°).

–Las comisiones jurisdiccionales deberán expedirse en un plazo de 60 días hábiles administrativos, prorrogable por cuestiones de hecho fundadas (artículo 3°).

–Los plazos serán perentorios y su incumplimiento hará incurrir en falta grave (artículo 3°).

–Finalmente, se prevé la invitación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las normas reseñadas (artículo 4°).

2.2. Título II, sobre autoseguro.

En el título II se prevé la creación de un régimen de autoseguro público provincial para asegurar a los empleados públicos de las provincias, municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con relación a ello se establece:

–Cada jurisdicción deberá garantizar la existencia de una estructura suficiente para el adecuado otorgamiento de las prestaciones en especie que prevé la Ley de Riesgos del Trabajo, conforme lo que fije la Superintendencia (artículo 5°).

–Las prestaciones dinerarias deberán ser administradas mediante un régimen de gestión separado del de la contabilidad general provincial (artículo 5°).

–Los empleadores que opten por este régimen deberán inscribirse en un registro que se cree al efecto y cumplir las obligaciones y procedimientos que la ley 24.557 pone a cargo de los empleadores y de las

aseguradoras de riesgos del trabajo, con excepción de la afiliación, aporte al fondo de reserva y toda otra obligación incompatible con dicho régimen (artículo 6°).

–La Superintendencia de Riesgos del Trabajo fiscalizará a los empleadores que se incorporen a este régimen y establecerá los programas de prevención aplicables (artículo 8°).

2.3. Título III, sobre modificaciones a normas del sistema de riesgos del trabajo.

En el título III se incluyen normas que vienen a modificar el ordenamiento sobre riesgos del trabajo, contenido en las leyes 24.557 y 26.773. Tales modificaciones se reseñan seguidamente:

a) Se sustituye el artículo 7° de la ley 24.557, norma que regula la incapacidad laboral temporaria, introduciendo los siguientes cambios:

–La norma vigente contempla el cese de la incapacidad laboral temporaria por el transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante; el proyecto eleva ese plazo a dos años (artículo 10).

–Vinculado con ese supuesto, se incorpora una previsión que establece que si el trabajador damnificado, dentro del referido plazo de dos años, se hubiera reincorporado al trabajo y volviera a estar de baja por idéntico accidente o enfermedad profesional, su situación de incapacidad laboral temporaria continuará hasta el alta médica, declaración de incapacidad permanente en caso de corresponder, su deceso o hasta completar dos años efectivos de baja, sumándose todos los períodos en los cuales se hubiera visto impedido de trabajar;

b) Se sustituye el artículo 12 de la ley 24.557, norma que regula el ingreso base para el cálculo del monto de las indemnizaciones.

La norma vigente establece que: “A los efectos de determinar la cuantía de las prestaciones dinerarias se considera ingreso base la cantidad que resulte de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, devengadas en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor a un año, por el número de días corridos comprendidos en el período considerado [...]. El valor mensual del ingreso base resulta de multiplicar la cantidad obtenida según el apartado anterior por 30,4”.

En sustitución de ello el proyecto establece respecto del cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte el siguiente criterio:

–Para el cálculo de ingreso base “se tendrá en cuenta el promedio de los últimos cuatro salarios normales y habituales inmediatamente anterior a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de prestación del servicio si fuera menor”.

–Se aplicará un interés sobre el monto del ingreso base a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, desde la fecha de la primera manifestación invalidante

hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación.

–En caso de mora en el pago de la indemnización, se devengará el mismo interés hasta la cancelación;

c) En el artículo 27 de la ley 24.557, norma referida a la afiliación a las aseguradoras de riesgo del trabajo, se agrega un apartado 6, que establece:

–La posibilidad de que la aseguradora pueda extinguir el contrato de afiliación con un empleador en caso de falta de pago de dos cuotas mensuales, consecutivas o alternadas, o la acumulación de una deuda total equivalente a dos cuotas, tomando como referencia la de mayor valor en el último año, conforme lo que prevea la reglamentación.

–A partir de esa extinción, el empleador se considerará no asegurado.

–Sin perjuicio de ello, la aseguradora deberá otorgar prestaciones en especie por las contingencias ocurridas dentro de los tres meses posteriores a la extinción por falta de pago, las que podrá repetir al empleador;

d) Se sustituye el artículo 37 de la ley 24.557, que regula el financiamiento de los entes de supervisión y control.

Con relación a ello, por un lado incorpora el aporte de los empleadores autoasegurados públicos provinciales.

Por otro lado, establece límites a esa contribución, del 1,4 % para las aseguradoras de riesgos del trabajo sobre las cuotas percibidas por los contratos de afiliación, y del 0,5 % para los empleadores autoasegurados públicos provinciales y los empleadores autoasegurados de la masa salarial promedio de los últimos seis meses;

e) Se sustituye el primer apartado del artículo 46 de la ley 24.557, norma que regula la competencia judicial para recurrir las resoluciones de las comisiones médicas.

La norma actual contempla que las resoluciones de las comisiones médicas provinciales serán recurribles ante el juez federal con competencia en cada provincia o ante la Comisión Médica Central, a opción de cada trabajador. También que las resoluciones que dicte el juez federal y la Comisión Médica Central serán recurribles ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.

La nueva norma reproduce la del artículo 2º del título I, que ya fue reseñada, contemplando la competencia del fuero laboral para recurrir las resoluciones de las comisiones, previendo el recurso directo respecto de las de la Comisión Médica Central;

f) Se sustituye el cuarto párrafo del artículo 4º de la ley 26.773.

La norma actual contempla que las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad diferentes al de riesgos del trabajo, sólo podrán

iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente que debe hacer el obligado al pago de las prestaciones de la ley 24.557, la que debe realizarse dentro de los quince días de notificados de la muerte del trabajador o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral, detallando los importes que les corresponde percibir por aplicación precisando cada concepto en forma separada.

La norma proyectada prevé además que deberá estar agotada la vía administrativa mediante resolución de la respectiva comisión;

g) Se incorpora el artículo 17 bis a la ley 26.773, estableciendo que: “Determinase que solo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al artículo 11 de la ley 24.557 [...] y los importes mínimos establecidos en el decreto 1.694/09, se deberán incrementar conforme la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), desde el 1º de enero de 2010 y hasta la fecha de las primeras manifestaciones invalidantes de la contingencia, considerando la última variación semestral del RIPTE de conformidad con la metodología prevista en la ley 26.417”;

h) El artículo 17 del proyecto establece que las prestaciones dinerarias e indemnizaciones que se liquiden deberán ser depositadas en la cuenta sueldo del respectivo trabajador, creada por la ley 26.590;

i) El artículo 18 del proyecto contempla que:

–Estarán a cargo de las ART o empleador autoasegurado los gastos de atención médica en que incurra la obra social del trabajador que resulten cubiertos por la ley 24.557;

–Las prestaciones en especie que sean brindadas por las ART y que resulten motivadas en accidentes o enfermedades inculpables no alcanzadas por la ley 24.557 serán reintegradas por la respectiva obra social.

–Se contempla la creación de una comisión especial entre la AFIP, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Superintendencia de Servicios de Salud para dictar normas reglamentarias para instrumentar esos reintegros;

j) El artículo 19 del proyecto contempla que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo deberá remitir, en el plazo de un año, al comité consultivo permanente creado en el artículo 40 de la ley 24.557, un proyecto de ley de protección y prevención laboral destinado a garantizar que las condiciones y medio ambiente de trabajo resulten acordes con las mejores prácticas y la normativa internacional;

k) El artículo 20 del proyecto establece que la modificación al artículo 12 de la ley 24.557, se aplicará a contingencias cuya primera manifestación invalidante sea posterior a la entrada en vigencia de la ley;

l) El artículo 21 introduce las siguientes derogaciones:

–El artículo 8º de la ley 24.557. Esa norma regula la incapacidad laboral permanente.

–El apartado 6 del artículo 17 de la ley 26.773, que establece: “6. Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1.694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010. La actualización general prevista en el artículo 8° de esta ley se efectuará en los mismos plazos que la dispuesta para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por el artículo 32 de la ley 24.241, modificado por su similar 26.417”. Tal derogación se compatibiliza con la nueva norma proyectada del artículo 17 bis de la ley 26.773.

3. Cuestiones generales. La obligatoriedad de recurrir a las comisiones médicas. Objeciones constitucionales

3.1. Como ya lo señalé, la modificación sustancial que contiene el proyecto consiste en reinstalar la obligatoriedad de la recurrencia previa y obligatoria al procedimiento de las comisiones médicas (CC.MM.) del sistema.

Resulta de interés aludir a dos claras posiciones que se han plasmado en los debates que tuvo el proyecto.

Por un lado, la de los representantes del Poder Ejecutivo. Señalaron respecto del tema que se trata que se ha incrementado la litigiosidad; que si se analiza la cantidad de juicios presentados con relación a la cantidad de accidentes, la distancia crece año a año, que ello complejiza muchísimo un sistema que le asegure al trabajador la mejor cobertura, la tarea rehabilitante, la posibilidad de reinsertarse en el ámbito del trabajo y, en el caso de que no lo pueda hacer, asegurarse las prestaciones correspondientes para el resto de su vida.

Se ha señalado que el sistema, como estaba funcionando, no favorecía a los trabajadores. Era un sistema por el cual cualquier trabajador que tenía un siniestro, un accidente, pasaba hasta 90 días sin ser atendido por una comisión médica; no se le otorgaba, en tiempo y forma, la posibilidad de ser atendido por una comisión médica que le determine lo que correspondía con relación a su incapacidad. Pero tampoco se le aseguraba un proceso judicial acelerado, que tiene un promedio de casi tres años de juicio.

Se ha planteado que el proyecto busca ir resolviendo algunas de las cuestiones problemáticas. También que lo primero tiene que ver con el proceso de funcionamiento de las comisiones médicas, la tarea administrativa y procedimental que tiene que llevar adelante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, los controles y exigencias que se le ponen a la aseguradora de riesgos del trabajo. Han destacado que se ha venido trabajando en esa temática para mejorar el funcionamiento de las comisiones médicas.

También se ha sostenido desde el Poder Ejecutivo que el 70 % de las controversias que hay por la Ley de

Riesgos del Trabajo no van a las comisiones médicas de dicha ley, sino que va a la justicia laboral directamente, la cual no está sujeta a las normas del sistema de riesgos del trabajo sino a las de la justicia. Alegaron al respecto que no es bueno en un sistema que el 70 % no vaya por dentro, que la justicia debe existir siempre, pero debe ser marginal, si no el sistema no está bien. También que del 30 % de los casos que pasan por las comisiones médicas, la mayoría, el 85 %, los resuelve la comisión médica.

En función de ello se plantea que es necesario parar la judicialidad, la litigiosidad, y que el centro de la cuestión para ello es la intervención de las comisiones médicas, que es un problema más que nada de gestión de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para ello se plantea que es necesario que la ley establezca que sea obligatoria la participación de la comisión médica en los diferendos, como una instancia previa, única y excluyente.

Se reconoce que es una tarea del Poder Ejecutivo mejorar el funcionamiento de las comisiones médicas, pero esa cuestión no es objeto del proyecto que, en lo sustancial, plantea solo la obligatoriedad de acudir a ellas.

3.2. Por otro lado, resulta que los distintos expositores invitados que se presentaron en los debates de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, representantes de organizaciones profesionales y sindicales vinculadas con el sistema, han coincidido en sostener que el cambio referido es constitucionalmente objetable. Comparto muchas de las objeciones planteadas, a partir de las cuales considero que debe rechazarse el proyecto.

Con la obligatoriedad que se pretende instaurar para que el trabajador tenga que reclamar las prestaciones por riesgos del trabajo ante las comisiones médicas se procura restablecer algo que previó la ley original, 24.557, sancionada en el año 1995.

El aspecto esencial del proyecto está basado en instaurar un procedimiento administrativo previo, obligatorio y excluyente. Se trata de una especie de filtro para el acceso a la justicia de los trabajadores damnificados, todo con la declarada finalidad de limitar la litigiosidad que afecta al sistema.

Como primera crítica a ese procedimiento especial diseñado por la ley 24.557 se debe señalar que la obligatoriedad del procedimiento de ir a las comisiones médicas fue declarado inconstitucional por cuatro conocidos fallos de la Corte, que son “Castillo”, “Venialgo”, “Marchetti” y “Obregón”, que determinaron la inconstitucionalidad de los artículos 21, 22 y 46, inciso 1, de la LRT y de las normas reglamentarias correspondientes, e invalidaron ese procedimiento especial. Se puede citar particularmente el caso “Obregón”, en el cual se declaró la inconstitucionalidad de las comisiones médicas por impedir el acceso del trabajador en forma inmediata a la justicia, constituyendo una valla para que el trabajador acceda libremente a un tribunal competente, quedando aquéllas como una instancia voluntaria.

En el mismo sentido, se ha señalado en forma generalizada que la modificación que involucra el proyecto contraviene la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia fijada en los fallos mencionados.

La Corte ha sido expresa al decir que la obligatoriedad de una instancia previa nacional no es constitucional. El proyecto plantea la adhesión de las provincias para superar esa objeción, pero ocurre también que incluso se podría cuestionar la cesión de facultades de aquéllas al gobierno federal en los términos que se propone.

Respecto a esa delegación, el artículo 4º del proyecto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a delegar en manos de la jurisdicción federal una serie de competencias jurisdiccionales provinciales y a que las provincias adecuen la normativa local que resulte necesaria. Se puede cuestionar esa delegación por resultar constitucionalmente inadmisibile, pues supone que los estados provinciales realicen actos contrarios a los artículos 5º, 75, inciso 12, 121 y 122 de la Constitución Nacional, y también a la normativa de las constituciones provinciales, según lo han manifestado muchos senadores y expositores.

Por otro lado, se debe sostener que es inconstitucional que un tribunal administrativo compuesto por médicos sea el órgano que debe resolver obligatoriamente las cuestiones que se tratan. El aporte técnico de los médicos es esencial en el dictamen de los aspectos que hacen a su profesión, pero no están formados para dictar resoluciones sobre la naturaleza jurídica y laboral de los accidentes o enfermedades del trabajo y otras cuestiones procesales de forma y de fondo.

Las facultades jurisdiccionales de las comisiones médicas son inconstitucionales. Además, ocurre que los médicos no están en condiciones de definir categorías jurídicas ni hacer juicios que tienen que ver con la contienda que se dirime entre un trabajador y la ART.

En general, o en su mayoría, los conflictos que se suscitan son de orden jurídico y se tramita un proceso contencioso con dos partes, siendo las comisiones médicas tribunales médico-administrativos que no están en condiciones de abordar técnicamente la cuestión.

3.3. Adicionalmente a lo expuesto, se debe señalar que el sistema de las comisiones médicas trae indudables inconvenientes de carácter práctico.

Por ejemplo, según se ha expresado en los debates de la Comisión de Trabajo, 16 provincias de nuestra República tienen una sola comisión médica, algunas están a 1.000 kilómetros, otras a mayor distancia y, la mayoría, haciendo un promedio, a no menos de 600 kilómetros. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay cinco, pero a la vez tiene 70 tribunales del trabajo. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 11 comisiones médicas y tiene 80 juzgados y una cámara con 10 salas.

Se ha mencionado también el caso de La Pampa, provincia en la que hay una comisión médica que está en la ciudad capital, Santa Rosa, que tiene un solo mé-

dico. Ese médico atiende los casos de la ANSES, los casos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, pero a su vez es médico de una de las ART.

No se entiende cómo puede atenderse debidamente la demanda que requeriría la totalidad de un sistema obligatorio como el que se plantea, con la estructura existente. Existe una imposibilidad práctica de carácter absoluto.

Las pocas comisiones médicas actualmente existentes, que además están sobrepasadas de trabajo en los temas de jubilaciones y pensiones, hacen que sean verdaderamente inaccesibles.

Tiene que haber un sistema de mayor accesibilidad a las comisiones médicas y mayor cantidad de comisiones médicas, y nada de esto resulta del proyecto.

Esa circunstancia, más lo señalado en cuanto a las objeciones que ya ha sentado la Corte, determina que la modificación que estamos tratando, de ser aprobada, seguramente será pasible de nuevas declaraciones de inconstitucionalidad.

3.4. A lo expuesto debe agregarse otra cuestión general que aparece involucrada en la temática que se trata.

Aludo a lo relativo a los Listados de Enfermedades Profesionales y el Baremo de Incapacidades. El artículo 2º, párrafo octavo, del proyecto establece: "Para todos los supuestos resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9º de la ley 26.773". Se trata de la obligatoriedad de la aplicación del Listado de Enfermedades Profesionales previsto como anexo I del decreto 658/96 y de la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como anexo I del decreto 659/96.

El listado y baremo referidos se encuentran desactualizados y caducos, y resultan criticables por establecer una causalidad inmediata del trabajo, excluyendo cualquier factor ajeno a él, lo cual muchas veces determina que el trabajador se vea obligado a recurrir a la vía judicial o incluso civil para poder obtener el resarcimiento frente a un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Se sostiene también, en lo que hace a las enfermedades, que se trata de un listado cerrado que omite los modernos criterios de medicina legal sobre la existencia de muchas otras enfermedades que las limitadamente reconocidas por dicho listado, contradiciendo todos los avances científicos en materia de etiología de las enfermedades laborales.

En orden a ello, resulta que una porción importante de reclamos judiciales que existen tienen que ver con el hecho de que muchas enfermedades laborales no son reconocidas como tales por las ART ni por las comisiones médicas, para quienes la mayoría son preexistentes, inculpables, rechazándolas como laborales.

Las propias estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo sólo confirman un promedio anual del 2,38% de enfermedades reconocidas (en el año 2014 se reconocieron 660.954 eventos dañosos y tan

sólo 24.576 enfermedades laborales), cuando para la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) existen muchas más enfermedades laborales que accidentes traumáticos. La OIT a nivel mundial y en promedio refiere un 38 % de enfermedades profesionales del total de la accidentología declarada, muy distante del referido registro nacional del 2 %.

Esto significa que muchos reclamos de trabajadores son forzosamente dilucidados en la Justicia, porque resultan rechazados por los órganos del sistema de riesgos del trabajo. Ocurre que muchas patologías no son reconocidas en los hechos ni por las ART ni por la Superintendencia ni por las comisiones médicas. Esto genera un nivel de litigiosidad consecuente con esos rechazos, siendo que luego en sede judicial los reclamos son reconocidos.

Se ha señalado inclusive que el Consejo de Administración de la OIT aprobó una nueva lista de enfermedades profesionales en su reunión del 25 de marzo de 2010. Esta sustituye a la que figura en el anexo de la recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales y el registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales número 194, que fue adoptado en 2002. Estos nuevos convenios y protocolos de la OIT han sido ratificados por las leyes 26.693 y 26.694, sancionadas por el Congreso Nacional en el año 2011. Luego se sancionó la ley 26.773, que contiene el artículo 9°, cuya aplicación se viene a insistir en el proyecto bajo análisis. Ello involucra una contradicción entre los criterios contemplados en los convenios de la OIT ratificados por las mencionadas leyes 26.693 y 26.694 y el listado de enfermedades a que alude la citada ley 26.773 en su artículo 9°.

Considero que resulta necesario actualizar ese listado y baremo, como lo ha hecho la OIT. Con ello seguramente se logrará reducir la litigiosidad, ya que no será necesario acudir a la Justicia para que se reconozca el carácter laboral de una enfermedad o accidente. En su caso, se requiere contar con un listado indicativo y no excluyente de enfermedades profesionales.

Pero en nada se avanza en tal actualización o mejora en el proyecto, sino que, por el contrario, se insiste en la obligatoriedad del actualmente vigente, contrariando inclusive el mencionado convenio 155 y los protocolos de la OIT que abren los listados y establecen criterios más flexibles.

4. Observaciones puntuales

Adicionalmente a las objeciones generales que desarrollé en el capítulo anterior se presentan también algunas observaciones puntuales que cabe mencionar. Seguidamente se alude a esas cuestiones.

—La normativa en tratamiento, en sus artículos 2° y 14 (este último que sustituye el artículo 46 de la ley 24.557), contempla que, una vez agotada la instancia prevista ante las comisiones médicas jurisdiccionales, las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central o ante la justicia ordinaria

del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la comisión médica que intervino. Se fija la competencia judicial exclusiva de los tribunales que correspondan al domicilio de la comisión médica que intervino. Con ello se altera la triple opción que, con carácter de beneficio para el trabajador, tiene para elegir la competencia en función de su domicilio, del domicilio legal de los obligados o del lugar de concertación del contrato o acaecimiento del siniestro. Tal opción se contempla, por ejemplo, en la ley 18.345, de procedimiento laboral para el fuero nacional, cuyo artículo 24 establece: “En las causas entre trabajadores y empleadores será competente, a elección del demandante, el juez del lugar del trabajo, el del lugar de celebración del contrato, o el del domicilio del demandado”. Al respecto, se estima que debe mantenerse la opción referida y no introducirse una limitación como la planteada, que involucra una clara regresión de derechos en contra del trabajador. Éste debe mantener la referida opción para preservar la posibilidad de acudir al fuero que le resulte más conveniente en función de su situación personal. Lo contrario seguramente determinará declaraciones de inconstitucionalidad en todos los casos en que, con la limitación que se pretende introducir, se termine limitando el derecho de acceso a la Justicia para el trabajador.

—El artículo 2° del proyecto prevé también que, respecto de las resoluciones de las comisiones médicas jurisdiccionales, se podrá plantear un recurso ante la justicia ordinaria del trabajo. A su vez, respecto de las resoluciones de la Comisión Médica Central, se podrá plantear un recurso directo ante los tribunales de alzada del mismo fuero. Se contempla que todos los recursos tendrán efecto suspensivo. Esto involucra una modificación del régimen actual. En efecto, en el procedimiento vigente, cuando el trabajador recurre la decisión de la comisión médica, ese recurso tiene efecto devolutivo (no suspensivo). Es decir que el trabajador puede ir cobrando la suma que la comisión médica le otorgó, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva respecto del recurso. El proyecto de ley establece un efecto suspensivo a esa apelación, la cual puede ser planteada incluso por la ART. Se coloca al trabajador en una situación que puede ser perjudicial, más teniendo en cuenta que es un trabajador accidentado y, por ello, vulnerable, que no podrá cobrar lo que se le reconozca mientras se sustancie el recurso o el juicio. Y esa apelación la puede hacer la ART, supuesto en el cual, si el trabajador consiente lo que le reconoce la comisión, tampoco podrá percibir en forma inmediata las prestaciones. Con todo, se estima que debe mantenerse el efecto devolutivo de los recursos que se contemplan, suprimiendo el carácter suspensivo previsto en el proyecto.

—También con relación a los recursos que contempla el artículo 2° del proyecto, se debe señalar que la norma proyectada no prevé el plazo para su interposición. Consecuentemente, corresponde aplicar el plazo de cinco días que resulta actualmente de la reglamentación.

Teniendo en cuenta que en el sistema actual no existe la obligatoriedad de acudir a las comisiones médicas, en función de la jurisprudencia de la Corte ya mencionada rige el plazo de dos años de prescripción previsto por la legislación laboral, por lo cual se concluye que, si se establece esa obligatoriedad, debería fijarse un plazo más amplio para los recursos que se contemplan en el proyecto. En efecto, ese plazo de cinco días resulta muy exiguo. Por caso, un trabajador recibe un dictamen médico y va a ir a la Justicia para cuestionarlo, por lo cual debe contar con un plazo más razonable. Pensemos incluso en la situación de los trabajadores del interior del país y en los casos de provincias en las que hay una sola comisión médica para todo el territorio. Con todo, resulta cuestionable la norma proyectada. Para superar esa objeción se debería prever, en el artículo 2º, un plazo específico y razonable para los recursos, por ejemplo, de 30 días para el que se plantee respecto de las resoluciones de las comisiones médicas jurisdiccionales y de 20 días para el directo respecto de las de la Comisión Médica Central.

—El artículo 11 del proyecto de ley sustituye el artículo 12 de la ley 24.557, relativo al cálculo del valor del ingreso base que se aplica para fijar las prestaciones. Introduce una mejora al contemplar la aplicación de intereses desde la primera manifestación invalidante hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, por la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Asimismo, para el caso de mora en el pago de la indemnización, se prevé la aplicación de la misma tasa hasta el momento de la efectiva cancelación. Con relación a este último supuesto (existencia de mora), se estima que debería preverse la aplicación de una tasa de interés mayor a la prevista para el primer supuesto, ya que se trata de un caso de incumplimiento. De lo contrario, la ART obligada al pago podría especular con la aplicación de esa tasa (que hoy en día incluso es negativa frente a la inflación) y dilatar el pago frente a la realización de inversiones financieras. En función de lo expuesto, considero que se debería prever para el supuesto de mora la aplicación de la tasa indicada más un 50 %, hasta el momento del efectivo pago.

—El artículo 15 del proyecto sustituye el cuarto párrafo del artículo 4º de la ley 26.773, para establecer: “Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo y agotada la vía administrativa mediante la resolución de la respectiva comisión médica jurisdiccional” (el texto en bastardilla corresponde al texto agregado). Con ello, se obliga al trabajador que decide renunciar a percibir las indemnizaciones tarifadas del régimen y opta por accionar por la vía civil a transitar previamente la vía administrativa. Carece de sentido que, siendo que el trabajador tiene la decisión de acudir a la vía civil y desear la prestación que le otorga el régimen de la LRT, de la cual ya ha sido notificado, se lo obligue a acudir

a la comisión médica cuando ya, reitero, ha desechado esa prestación. Ello involucra una mera dilación que solamente implicará extender en el tiempo el reclamo del trabajador. Seguramente también será declarada inconstitucional. Consecuentemente, esta modificación debería ser suprimida.

5. El dictamen de mayoría. Cambios introducidos

5.1. Finalmente, interesa hacer alusión a los cambios introducidos al proyecto que se trata por el dictamen de mayoría producido por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el cual resulta del Orden del Día N° 1.328/16.

Dicho dictamen en lo sustancial mantiene el proyecto del Poder Ejecutivo, aunque introduce algunas modificaciones. Esos cambios son los siguientes:

—En el artículo 1º se incorporan dos previsiones:

a) Por un lado, se consigna que la instancia administrativa obligatoria de las comisiones médicas será para “la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad” (la norma del proyecto original alude sólo al “otorgamiento de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo”). No se trata de un cambio sustancial, ya que lo incorporado resultaba implícito de la norma anterior;

b) Por otro lado, se agrega la siguiente previsión como último párrafo: “Los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas con empleadores alcanzados por lo estatuido en el apartado primero del artículo 28 de la ley 24.587 no están obligados a cumplir con lo dispuesto en el presente artículo y cuentan con la vía judicial expedita”. Se trata de una previsión adecuada, que exime la necesidad de acudir a las comisiones médicas a los trabajadores no registrados (más allá de que esa solución debería ser la misma en el caso de la norma original, ya que el trabajador no registrado no está comprendido en la cobertura del empleador).

—En el artículo 3º, en el párrafo que contempla que: “Todos los plazos resultarán perentorios”, se agrega la siguiente previsión: “y su vencimiento dejará expedita la vía prevista en el artículo 2º de la presente ley”. Se trata de una modificación importante, ya que determina que el solo vencimiento del plazo deja expedita la vía judicial prevista en el artículo 2º. No obstante ello, considero que esta modificación no resulta suficiente para superar las objeciones que se han planteado a la intervención obligatoria de las comisiones médicas.

—Con relación al artículo 12 de la ley 24.557 (artículo 11 del proyecto que lo sustituye), norma que regula el ingreso base para el cálculo del monto de las indemnizaciones, se introduce como modificación en el inciso 1, que se sustituye, el texto individualizado en bastardilla: “Artículo 12. Ingreso base. Establécese, respecto del cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, la aplicación del siguiente criterio: 1º — A los fines del cálculo del valor mensual del ingreso base se tendrá

en cuenta el promedio de los últimos cuatro salarios normales y habituales inmediatamente anteriores a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de prestación de servicio, si fuera menor o el último salario normal y habitual inmediatamente anterior a la primera manifestación invalidante, si éste fuera mayor". El cambio involucra una mejora adicional a favor del trabajador en lo relativo a la forma de determinación del ingreso base que se utiliza para los fines indicados.

—Con relación al artículo 15, que sustituye el cuarto párrafo del artículo 4° de la ley 26.773 (que establece que las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez agotada la vía administrativa de las comisiones médicas), se incorpora también que la acción queda expedita "cuando se hubiere vencido el plazo legalmente establecido" en el dictado de la resolución de esa comisión. Se trata de una modificación coherente con la que se hace al artículo 3° ya referida. No obstante ello, no salva la observación que se formula en el presente a la citada norma del artículo 15.

—En el artículo 18, que regula las compensaciones que deben otorgarse recíprocamente las ART y las obras sociales, según que se trate de prestaciones a cargo de una u otra, se agrega una previsión que establece que la AFIP "establecerá un procedimiento administrativo obligatorio para las partes, en caso de conflicto, que deberá incluir penalidades para los incumplidores".

—En el artículo 19, norma que establece que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo deberá remitir al Comité Consultivo Permanente, creado en el artículo 40 de la ley 24.557, un proyecto de ley de protección y prevención laboral destinado a garantizar que las condiciones y medio ambiente de trabajo resulten acordes con las mejores prácticas y la normativa internacional, se modifica el plazo que se contempla para esa remisión, que pasa de un año a tres meses. Asimismo, se agrega que el proyecto que se envíe deberá contener principios generales que sean ajustados en forma específica para cada actividad, a través de los convenios colectivos de trabajo. Se trata de una modificación introducida con base en las negociaciones realizadas con la Confederación General del Trabajo (CGT), a que se hizo alusión en el capítulo anterior.

—Finalmente, se introduce el artículo 23, que establece: "El Poder Ejecutivo deberá, dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la vigencia de la presente ley, elaborar un texto ordenado de las leyes 24.557, 26.773 y de la presente".

5.2. Como ya se señaló, las modificaciones que introduce el dictamen de mayoría no resultan suficientes para superar las objeciones generales que se han planteado.

Por otro lado, se debe resaltar que ese dictamen reseñado no recepta ninguna de las objeciones puntuales también efectuadas. Se puede señalar incluso con relación a estas últimas que existe un dictamen de minoría presentado por la senadora Negre de Alonso

que recepta parte de ellas. Pero no ocurre lo mismo con el dictamen de mayoría, con lo cual resulta que el proyecto que se presenta para su aprobación adolece también de todos los defectos puntuales que se han expuesto.

5.3. Finalmente, con relación a los cambios introducidos en el recinto al proyecto que se trata, interesa hacer alusión a tres de ellos, que tienen que ver con las objeciones puntuales expuestas precedentemente.

Por un lado, se modifica la previsión relativa al efecto de los recursos previstos respecto de las resoluciones de las comisiones médicas. Como ya se señaló, el proyecto original —como el dictamen de la mayoría— preveían el efecto suspensivo. En el recinto se modificó el artículo 2° y el artículo 14 (que modifica el artículo 46 de la ley 24.557), estableciéndose que los recursos procederán en relación y con efecto suspensivo, a excepción de los siguientes casos en los que procederán con efecto devolutivo: a) cuando medie apelación de la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central en el caso previsto en el artículo 6°, apartado 2, punto c) de la ley 24.557, sustituido por el artículo 2° del decreto 1.278/2000; b) cuando medie apelación de la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central en caso de reagravamiento del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. Se trata de un mejoramiento de la cuestión bajo análisis, no obstante lo cual se mantiene el efecto suspensivo cuando el recurso es interpuesto por el trabajador, con lo cual se mantienen las objeciones en ese supuesto.

También se modificó el artículo 2° en lo relativo a cuál es la comisión médica jurisdiccional competente para entender. Se prevé que lo será, a opción del trabajador, la del domicilio del trabajador, del lugar de efectiva prestación de servicios por el trabajador o, en su defecto, al del domicilio donde habitualmente aquel se reporta (se agrega la primera opción referida, y que es el trabajador el que tiene la opción —esto último resultaba implícito en la norma original—). Sin perjuicio de compartir la modificación, ella no subsana la objeción que se planteara con relación a la competencia judicial para entender en la revisión de las resoluciones de las comisiones médicas, toda vez que se mantiene que lo será la correspondiente al domicilio de la comisión que intervino. Si bien el trabajador es el que debe optar por la comisión en la instancia administrativa, en muchos casos ocurre —como ya se ha señalado— que esas comisiones sólo se encuentran en una jurisdicción, que puede no coincidir con la mejor opción de la jurisdicción judicial para esa instancia (no existe una comisión en cada una de las opciones que refiere la norma). Además de ser ése el caso, se limita de hecho la opción para el trabajador. En esos casos, el trabajador debería tener también la opción de elegir la jurisdicción judicial que le conviene, y no introducirse una limitación que resulta de la norma proyectada. Es así que, sin perjuicio del cambio introducido, subsiste la objeción planteada.

La otra modificación que se introdujo y que se debe resaltar es al artículo 11 (que sustituye el artículo 12 de la ley 24.557), relativo al cálculo del valor del ingreso base que se aplica para fijar las prestaciones. Como ya se señaló, resultaba objetable el proyecto en cuanto no preveía la aplicación de una tasa de interés mayor o agravada para los casos de incumplimiento en el pago de las prestaciones. Con la última modificación introducida se contempla que, a partir de la mora en el pago de la indemnización, será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial, acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina hasta la efectiva cancelación. Se mantiene la misma tasa de interés, pero se contempla la capitalización de ellos como efecto de la mora. Se estima que ello constituye una solución adecuada para superar la objeción que se planteara, exclusivamente con relación a esta cuestión.

Se mantienen, no obstante, las demás objeciones planteadas.

6. Conclusión

Como cierre y conclusión de todo el desarrollo precedente, dejo sentado que la sumatoria de las objeciones generales y puntuales que han sido expuestas determina que no corresponda acompañar el proyecto en tratamiento.

7

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BASUALDO

Ley complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo (O.D. N° 1.328/16 y anexo)

Señora presidente:

En estos momentos estamos tratando un proyecto de ley complementaria del Régimen sobre Riesgos de Trabajo.

Cabe destacar que se está intentando solucionar la situación de los trabajadores dentro del ámbito formal e informal, y esto es lo que le debemos a nuestros trabajadores.

Es de señalar que es algo que nos requiere nuestra sociedad: el determinar la igualdad entre los trabajadores. Existiría una equiparación entre los trabajadores nacionales, provinciales y municipales.

El determinarse para las comisiones médicas un plazo de sesenta días para emitir dictamen, el que es obligatorio, vinculante y con características legales de homologación, significa una simplificación del proceso de la situación ante el siniestro.

Un aspecto importante es que se solucionaría la problemática existente respecto a la gran cantidad de juicios existentes en el Poder Judicial. Este proyecto reduciría la litigiosidad dado que, si el trabajador no

está de acuerdo con el dictamen de la comisión médica, apelará ante la Comisión Médica Central local y, si considera injusta la decisión final, recién ahí puede iniciar el litigio ante el Poder Judicial. Con esto se aliviarían de pleitos en el Poder Judicial.

Por todo lo expuesto, quiero adelantar mi voto positivo al presente proyecto de ley.

8

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BASUALDO

Modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias (C.D.-105/16)

Señora presidente:

Estamos tratando una ley que se le debía a nuestra sociedad, en esencia estamos redefiniendo a los contribuyentes pasivos de cuarta categoría, actualizando sus montos y procurando que el impuesto solo alcance a las personas que efectivamente poseen capacidad contributiva.

Uno de los aspectos más importante es que el presente proyecto es un acuerdo entre todos los actores de nuestra sociedad cívica y política. Un acuerdo en el que intervinieron los gobernadores, el Congreso, las asociaciones gremiales, el Poder Ejecutivo y las asociaciones civiles que integran nuestra comunidad.

Un país sustentado en leyes que se sancionan por consenso y atendiendo a las necesidades y requerimiento de todos los sectores que integran nuestra sociedad está construyendo civismo y legitimidad democrática, procurando devolver credibilidad a las instituciones argentinas, las cuales constituyen los pilares básicos de una democracia de calidad y permiten administrar el país con gobernabilidad y justicia.

No voy a repetir los conceptos que reiteradamente mis pares han tratado con propiedad y altura en este recinto, pero sí me voy a referir en términos conceptuales a algunos de los beneficios de la presente ley.

La actualización de los mínimos no imponibles y las deducciones es una asignatura pendiente desde hace un largo tiempo en la Ley de Impuesto a las Ganancias y, más allá de los nuevos montos, los cuales se podrán volver a definir en el futuro conforme a los requerimientos de la realidad imperante, lo más importante es que se actualizarán todos los años en base al RIPTE.

Otro aspecto importante que aborda el proyecto es incluir como sujeto pasivo del impuesto a los jueces que sean designados a partir del año 2017. Un avance importante pues incluye a los jueces como sujetos pasivos de tributación, los actores encargados de administrar justicia y equidad, pero que no pregonan con su ejemplo; es una igualdad que la sociedad les requiere. Tal vez éste sea el inicio de una reforma que en el futuro podría ser más relevante, equitativa y profunda.

El reconocimiento a los hombres y mujeres del sector pasivo, que trabajaron y tributaron toda su vida

y que, en el momento de poder disfrutar de sus jubilaciones, las encuentran menguadas por el impuesto. Con la presente modificación solo tributarán las que superen las seis jubilaciones mínimas.

Nos debemos una reforma tributaria que nos permita tener un sistema impositivo más progresivo, justo y equitativo, pero, hasta tanto sea girada al Congreso, el presente proyecto de ley alivia a los trabajadores de la excesiva carga tributaria que recae sobre ellos.

El tratamiento de los conceptos aguinaldo, horas extras, alquileres y viáticos dotará de una progresividad más acentuada al sistema impositivo y la incorporación de nuevos contribuyentes integrantes del sistema judicial le otorga mayor equidad y justicia a la imposición.

Queda mucho por avanzar, modificar y analizar, pero creo que con el presente proyecto hemos comenzado a transitar un camino que nos llevará a la obtención de una legislación tributaria más acorde a los tiempos en que vivimos, más moderna, que permita la obtención de recursos por parte del Estado para poder atender sus funciones y objetivos propios e indelegables, pero, al mismo tiempo, que tales recursos sean aportados por los ciudadanos de mayores ingresos y liberar a los ciudadanos con menores ingresos de tributar el impuesto.

Solamente lograremos la aceptación de nuestra legislación impositiva si conseguimos que los impuestos recaigan sobre los que se encuentren en la parte superior de la pirámide de ingresos y que además administremos con austeridad y eficiencia los recursos obtenidos para brindar servicios de calidad, que permita al ciudadano formar la conciencia de que los impuestos vuelven a la sociedad. Falta mucho para esto, pero tal vez estemos en este día comenzando a recorrer el sendero para lograr el objetivo mencionado.

Por todo lo expuesto es que adelanto el voto positivo al presente proyecto de ley.

9

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIACOPPO

Ley complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo (O.D. N° 1.328/16 y anexo)

Señora presidente:

En esta Cámara de Senadores están representados los diversos pensamientos de la sociedad, por lo cual el debate es importante. La confrontación de ideas es relevante y es en ella donde surgen los consensos como espacio propicio para tomar grandes decisiones.

En esta Cámara hemos tratado leyes de trascendencia social, como la que venimos hoy a dar tratamiento. Este es el compromiso de este gobierno con los sectores más débiles de la sociedad y de la clase trabajadora.

Esta gestión de gobierno se ocupó de la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Tratamos hoy un proyecto que va a constituir un paso adelante en lo que es el régimen de responsabilidad de riesgos del trabajo.

Esta iniciativa viene a atender cuestiones importantes, entre otras, la creación de políticas de prevención y la unificación de las leyes 24.557 y 26.773.

También otro punto importante a destacar es la adhesión que las provincias deben hacer a esta norma. De esta manera se pretende lograr zanjar la inconstitucionalidad existente en el funcionamiento de las comisiones médicas.

La sanción de esta norma resulta de importancia por cuanto asegura un trámite administrativo que contará con patrocinio letrado gratuito y plazos más cortos en la instancia de conciliación, lo que hace expedita la vía del resarcimiento. Resarcimiento de los daños sucedidos en ocasión del trabajo o de enfermedades inculpables, ya que muchas veces los trabajadores y sus causahabientes se encuentran en una posición de desventaja frente al debido resarcimiento.

La Ley sobre Riesgo del Trabajo creó, desde su sanción en 1995, un sistema que, más que ayudar o favorecer a los trabajadores, muchas veces lo perjudicó.

Esta iniciativa tiene como principal objetivo reducir la litigiosidad del sistema de riesgo del trabajo. Por lo que se intenta reducir las causas judiciales por enfermedades y accidentes laborales, buscando que los reclamos queden solucionados en la etapa administrativa, a través de la intervención obligatoria previa de las comisiones médicas jurisdiccionales, las que tendrán carácter previo y dentro de ella funciona un servicio de homologación.

Lo que se busca es una legislación laboral moderna, razonable, con indemnizaciones justas, con cobro rápido y sin perjuicios para trabajadores y empleadores.

El principio protectorio del derecho laboral es para todas las acciones, porque el derecho laboral es de orden público. El principio protectorio es *in dubio pro operario*, se trata de brindar protección al trabajador, que es la parte más débil de la relación laboral.

Nuestro régimen de riesgo de trabajo está basado en la reparación de daños y no específicamente en la prevención.

Los accidentes de trabajo ocupan, después de los accidentes de tránsito, las estadísticas más altas en siniestros. Los accidentes laborales no son en la mayoría de los casos hechos inevitables, por lo que la manera más eficaz de enfrentar dicha contingencia es a través de la prevención, tomando todos los recaudos posibles para tutelar la seguridad de los trabajadores, ya sea educando, informando, o incorporando tecnología que tienda a evitar eventos riesgosos.

Es así que este proyecto que hoy debatimos establece que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo deberá remitir al Comité Consultivo Permanente, dentro del plazo de un año, un proyecto de ley de protección y prevención.

La ley 24.557 fue sancionada en el contexto de la convertibilidad, por lo que tenía presente, para el cálculo indemnizatorio, el salario promedio del año anterior. Es decir que no tenía en cuenta el salario al acaecimiento del hecho dañoso.

El proyecto que hoy debatimos propone, en cuanto al ingreso base, tomar en cuenta para su determinación el promedio de los últimos cuatro salarios normales y habituales anteriores a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de prestación del servicio, si fuera menor.

Lo que debemos buscar con esta iniciativa es lograr una línea de avance en las condiciones del trabajador, con el fin de otorgarle mejoras dentro de un proceso de crecimiento económico.

Estamos en un contexto diferente frente a nuevos desafíos, que esta gestión de gobierno viene a establecer en pos del mejoramiento de los derechos de los trabajadores.

La legislación en materia de riesgos del trabajo tuvo una larga evolución desde aquella ley de 1995.

Con este proyecto, lo que se busca, como ya lo mencioné en otras palabras, es facilitar el acceso del trabajador a la reparación para que la cobertura sea justa, rápida y plena, brindando un ámbito de seguridad jurídica que garantice al damnificado y a sus causahabientes un mecanismo eficaz en tutela de sus derechos.

Esta propuesta avanza sobre los parámetros de justicia, equidad y seguridad jurídica.

Con esta ley que hoy tratamos venimos a salvar una situación de vulnerabilidad de los trabajadores. No venimos a bajar solamente la litigiosidad. Cuando se habla de industria del juicio debemos recordar que si existen juicios es porque hay derechos vulnerados.

El 26 de octubre de 2012 se dictó la ley 26.773, modificatoria de la ley 24.557, que nuevamente de manera tarifada previó ciertas prestaciones dinerarias para cubrir los infortunios laborales.

El actual proyecto pretende establecer criterios uniformes sobre la protección y resarcimiento de todos los trabajadores, sin importar en la provincia en que se encuentren.

10

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIACOPPO

Modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias (C.D.-105/16)

Señora presidente:

El impuesto a las ganancias o a las rentas de las personas físicas, en una de las categorías en las que se clasifica, se denomina de “cuarta categoría” y se calcula exclusivamente sobre la renta del trabajo personal. Entre otros rubros, el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia y en forma independiente. En

lo que hace a su liquidación, caracterizado como tributo personal, el impuesto se aplica con alícuotas progresivas, cuya estructura obedece generalmente al sistema de progresividad por escalas. En efecto, la razonabilidad de esas escalas está dada por la diferenciación de cada tramo y de su escala marginal, así como el número de éstos, determinados acorde a los criterios sobre equidad, redistribución y fines económico-sociales.

El proyecto sobre impuestos a las ganancias que vino con sanción de la Cámara de Diputados era totalmente irresponsable desde lo fiscal y desde lo político. Desde lo fiscal, porque generaba un crecimiento del déficit, ya que elevaba desmedidamente el mínimo no imponible, haciendo que el Estado nacional dejara de recaudar alrededor de 130.000 millones de pesos brutos, lo que era una virtual eliminación de las 1.780.000 personas que tributan este impuesto, y, a su vez, al imponer nuevos impuestos—como el destinado a gravar parte de la renta financiera—hacía muy difícil la estimación de la futura recaudación, por lo tanto generaba una gran incertidumbre desde el punto de vista de la recaudación y del gasto, ya que la certeza recaudatoria que se tiene sobre el impuesto a las ganancias es mucho más alta que la que tienen los nuevos impuestos, de dudosa cobrabilidad.

Desde lo político, porque claramente era una maniobra oportunista y malintencionada, ya que buscaba quitarle gobernabilidad a la coalición de Cambiemos, dado que, si bien es cierto que el presidente actual se había comprometido en campaña electoral a eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, también es cierto que no se comprometió a hacerlo en diez meses o un año, sino progresivamente. De hecho, en febrero de 2016 fue corregido el mínimo no imponible—pasando de 9.597 pesos a 25.000 pesos mensuales netos para los casados con dos hijos—cuyo costo fiscal fue de 49.000 millones de pesos, y la idea era hacerlo escalonadamente, junto con las modificaciones de las alícuotas o escalas, hasta fines de 2019, tal cual lo estipulaba el proyecto del oficialismo.

Acá quiero hacer una distinción con algunos legisladores, gremialistas y políticos, que consideran que el “impuesto a los salarios no es ganancia”. El impuesto progresivo por naturaleza es ganancias. El impuesto a las ganancias actúa como un impuesto a los ingresos personales y de las empresas y está bien que así sea. Tenemos que salir del debate de que el salario no es ganancia. La actualización que se está haciendo deja a los perceptores de menores ingresos afuera del impuesto. Junto a la reforma de las escalas, que va a permitir un tránsito gradual y progresivo de los que pagan, tenemos que acostumbrar a la gente a que ganancias o ingresos personales/empresas es un impuesto justo.

Considero que toda esta confusión viene originada por dos motivos principales. El primero es que el anterior gobierno nunca reconoció la inflación. El segundo motivo es porque se dicen algunas verdades a medias y eso se llama mentir. Por ejemplo, el pasado martes 13

de diciembre uno de los expositores decía en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que en Chile un trabajador comienza a tributar a partir de los 180.000 pesos de salario mensual (versión taquigráfica del 13/12/16) y eso no es así. El país trasandino tiene un mínimo no imponible de 953 dólares mensuales –en pesos argentino sería el equivalente a 15.248 pesos–, entonces nosotros queremos cambiar las cosas en nuestro país, pero diciendo la verdad, por más dura que sea.

Transparentar las estadísticas y reconocer que tenemos un 32% de pobreza es parte de la idea de Cambiemos. En el gobierno anterior se negaron muchas cosas y se miró para otro lado, por eso hicieron que la recaudación del impuesto se tornara regresiva, porque cuando hablamos de una estructura tributaria regresiva, lo que estamos diciendo es que los pobres pagan proporcionalmente más impuestos que los ricos –una verdad lisa y llana– y porque la inflación no reconocida hizo estragos en este impuesto porque no se produjo una actualización lógica en las escalas y en las deducciones al impuesto. Por esos motivos estamos donde estamos, discutiendo que si es justo o injusto que los salarios tributen ganancias. Los salarios deben tributar, la discusión es a partir de qué piso y cómo se actualizan sin generar costos para los trabajadores y para el Estado.

También tenemos que cambiar la manera de hacer política. Me refiero al paro de transporte del pasado lunes 19. No podemos, en nombre de los trabajadores, iniciar una medida de fuerza cuando se está negociando un tema tan importante como es parte de la modificación tributaria de un país. Eso lo podríamos llamar deslealtad, porque con ese paro iniciado a las 5 de la mañana al que más se perjudicaba era al “laburante”, que tiene que tomarse el colectivo y el tren para llegar al trabajo y al que ni si quiera le afecta el tema de ganancias porque no llega a cobrar el mínimo no imponible. No nos olvidemos que estamos hablando de 1.780.000 personas que pagan ganancias sobre un total de 17,5 millones de trabajadores, es decir, un 10 %, y por lo tanto al trabajador lo único que hicieron fue quitarles la posibilidad de que cobren un adicional por presentismo, entre otras cosas.

También quiero referirme a la seguridad jurídica e institucional de la Argentina. Los mismos legisladores que hace pocos meses votaron a favor de la Ley de Sinceramiento Fiscal, o blanqueo, estableciendo los beneficios fiscales para los que decidan acogerse al régimen, hoy les cambian las reglas de juego pretendiendo volver a colocar algunos de los impuestos de los cuales se los eximía. Además, cuando el Ejecutivo nacional decidió cumplir con otra promesa de campaña al eliminar la mayor parte de las retenciones, al sector minero se les sacaron las retenciones y con el proyecto con sanción en Diputados se buscaba volver a poner las retenciones, por lo tanto el mensaje a los inversores no es serio, ya que ellos buscan estabilidad jurídica y política para poder “hundir” el capital necesario para sus proyectos. Entonces, si queremos fomentar la llegada de inversiones, el mensaje que les estamos enviando

es totalmente contradictorio y repetimos los errores del gobierno anterior, que continuamente cambiaba el marco jurídico.

Gravar parte de la renta financiera en un país donde hemos tenido una alta inflación en los últimos 70 años y una tasa de interés de plazo fijo que, en el mejor de los casos y siendo generosos, estuvo al mismo nivel de la inflación, intentar gravar la inversión del plazo fijo es un despropósito. Si somos serios, en todo caso lo que deberíamos gravar es la renta real, es decir, el diferencial entre la inflación y la tasa de interés que pagan los bancos por los depósitos de los clientes, porque si gravamos la renta nominal lo que estamos haciendo es ponerles un impuesto a las pérdidas, un contrasentido que no merece mayor análisis.

Para ir terminando, creo que parte de la oposición, con el proyecto de ganancias sancionado en Diputados, claramente buscó quitarles recursos al Estado nacional y a los provinciales, presionando al gobierno para que se endeudase más y con tasas de interés más elevadas por la coyuntura internacional actual, u obligarlo a recurrir al financiamiento vía emisión monetaria, lo que hubiese generado un aumento de la inflación para financiar ese déficit. Por eso celebro que los senadores hayamos realizado las modificaciones necesarias junto y con el consenso de los gobernadores y de los gremios, y pudiéramos arribar a un proyecto que se acerca al costo fiscal de 27.000 millones estipulado en la ley de presupuesto que votamos el mes pasado, que es de 34.000 millones.

Siempre he sostenido que no es equitativo que una empresa grande pague el 35 % de impuesto a las ganancias y una pequeña también, porque no existe progresividad. Por lo tanto, considero que esta propuesta de reforma para que las micro, pequeñas y algunas medianas empresas puedan gozar de un régimen de progresividad en el impuesto a las ganancias será tenida en cuenta en la reforma tributaria integral que se está trabajando en el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación y que se empezará a discutir el próximo año cuando se conforme la comisión bicameral para la reforma tributaria estipulada en la Ley de Sinceramiento Fiscal, o blanqueo.

Por todo lo expuesto, adelanto mi voto positivo a proyecto de ley de impuesto a las ganancias y me comprometo a presentar el año que viene un proyecto de ley sobre progresividad en el impuesto a las ganancias de las empresas.

11

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VERASAY

**Ley complementaria de la Ley de Riesgos
del Trabajo (O.D. N° 1.328/16 y anexo)**

Señora presidente:

Creo que el sistema de seguros de riesgos del trabajo es la mejor parte de la pesada herencia de los 90. Ge-

neró muchos beneficios en un país donde la “industria del juicio” era una de las más saludables.

Ahora bien, la industria del juicio logró filtrarse por las grietas del sistema y hoy, veinte años después, decimos que lo que está en riesgo es el sistema mismo.

Ese beneficio de algunos no solo pone en riesgo el sistema, como decía recién, sino también actúa como disuasivo a la generación de puestos de trabajo y también deja a los empleadores en un estado de incertidumbre sobre cuál sería su suerte si les tocara tener que litigar en un siniestro.

Hoy se asiste a un sistema que toma al trabajador de rehén en beneficio del profesional del derecho laboral y esto podemos verlo en casos donde se cobra la indemnización y luego se va a la justicia laboral. Si el 70 % de las demandas por contingencia llegan antes a los juzgados que a las comisiones médicas, nos enfrentamos a una realidad: el mejor legado de los noventa se desintegra.

Con la apertura de la vía civil, el sistema tuvo un cambio dramático y tarde o temprano íbamos a llegar a esta situación. Por lo cual debemos reconstruir un sistema objetivo, que baje la litigiosidad y, si no alcanza con este proyecto y con las medidas administrativas que tiene que tomar la superintendencia, deberemos avanzar en más medidas que garanticen la restitución de un sistema previsible.

La tramitación con garantía del debido proceso no puede ser la excusa porque nuevamente hay un solo beneficiario por litigar, debemos encontrar una solución justa en un sistema objetivo.

Asimismo, la norma incluye mejoras en el tratamiento del trabajador afectado porque amplía la cobertura a empleados públicos de nueve provincias y alrededor de trescientos municipios que no eran alcanzados por el sistema, al formalizar la habilitación del autoseguro público provincial.

Encontramos otros beneficios claros para el trabajador. Según nos informaba el ministro, el promedio del tiempo de litigio es de tres años, lo que es una afectación de derechos. El aporte de la CGT, que crea un sistema de homologación vinculando la Ley sobre Riesgos de Trabajo y la indemnización de las ART, estableciendo la más ventajosa para el trabajador y un criterio de cobro inmediato, va a resultar sumamente positivo mirando hacia adelante.

También el patrocinio letrado gratuito a los trabajadores y los plazos acotados en el tratamiento del caso, ya que estamos pasando de 100 días, promedio, a 60. Recordemos que el plazo promedio de atención en una comisión médica y las instancias conciliatorias que aseguren la rápida ejecución de lo que se ha establecido en las comisiones médicas cuando hay acuerdo de partes.

Como mejora sistémica del sistema de seguridad social, con este proyecto se garantiza el cobro por parte de las obras sociales cuando estas hayan prestado

cobertura a trabajadores que debían ser atendidos con recursos de las ART.

En síntesis, opino que es un buen proyecto para aprobar, señora presidente, que debe ser visto como un camino que se complementa con acciones que debe emprender la superintendencia.

Siempre habrá más para hacer en el campo de la prevención de los riesgos, aunque se haya avanzado mucho. Y para concluir, la “industria del juicio” tiene a trabajadores como rehenes y un costo inadmisibles para la sociedad, por lo tanto debemos ser implacables y, si no alcanza con esto, hay que ir por más hasta que reine la previsibilidad y la objetividad.

12

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VERASAY

Modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias (C.D.-105/16)

Señora presidente:

Hoy estamos trabajando sobre la modificación de un impuesto que bien puede decirse es un claro reflejo de la distorsión de las variables económicas que tenía la Argentina y que, sumado a algunas desafortunadas decisiones políticas, transformaron a un impuesto progresivo, que se tiene en todos los sistemas serios de tributación en el mundo, en un impuesto regresivo, una especie de castigo para los asalariados que debían pagarlo.

Así los argentinos padecieron la evasión que había de la realidad inflacionaria y la falta de vocación política para encontrar una solución que tuviera visos de razonabilidad; razonabilidad entre la responsabilidad fiscal y el impacto sobre los contribuyentes. Un coctel explosivo entre los prejuicios políticos sobre los beneficiarios y la voracidad fiscal para mantener la ficción del relato nos llevaron a esta situación.

Todos los sectores políticos éramos conscientes de que algo se debía hacer al respecto y esto quedó así plasmado en los acuerdos parlamentarios que se alcanzaron en oportunidad de tratar el presupuesto nacional para 2017, marco en el cual el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de modificación en el período de sesiones extraordinarias con una ampliación de beneficios que generaría la reforma del tributo, fueron contemplados.

Ahora bien, de golpe, en una noche de sorpresas, señora presidente, se acordaron de los contribuyentes y decidieron impulsar un proyecto populista, fuera de las posibilidades del sistema, fuera de la gobernanza. Reviviendo, por otro lado, viejas prácticas al cerrar el debate para que la minoría no opinara y, por si fuera poco, crearon impuestos para que la parodia tuviera visos de seriedad fiscal. Lo importante era la foto, no importaba romper una tradición parlamentaria donde el rol de iniciador en materia tributaria le ha cabido al Poder Ejecutivo.